



AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 686/99.
QUEJOSA: CENTRO MAGUEN DAVID, A.C.

PONENTE: MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
cinco de julio de dos mil.

VISTOS; y,
RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de
Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, el día once de junio de mil
novecientos noventa y ocho, ISAAC HAMUI MUSSALI, en
representación de la COMUNIDAD MAGUEN DAVID, A.C.,
demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en
contra de las autoridades y por los actos que a continuación se
señalan:

"AUTORIDADES RESPONSABLES:-- 1. Asamblea
"de Representantes del Distrito Federal.-- 2. C.
"Presidente de la República.-- 3. C. Jefe del
"Departamento del Distrito Federal, hoy Jefe del
"Gobierno del Distrito Federal.-- 4. C. Secretario
"del Medio Ambiente del Distrito Federal.-- 5. C.

"Director de Prevención y Control de la
 "Contaminación del Distrito Federal.--- ACTOS
 "RECLAMADOS:--- A) De la Asamblea de
 "Representantes del Distrito Federal reclamo la
 "expedición de la Ley Ambiental del Distrito Federal
 "publicada en el Diario Oficial de fecha 9 de julio de
 "1996, en cuanto a su artículo 27, fracción V, con
 "todas sus consecuencias y efectos.--- B) Del
 "Presidente de la República y del C. Jefe de
 "Gobierno del Distrito Federal reclamo, del primero
 "el decreto de promulgación de la referida Ley
 "Ambiental del D.F. y del segundo el refrendo del
 "aludido decreto promulgatorio.--- C) Del C.
 "Secretario del Medio Ambiente y del Director
 "General de Prevención y Control de la
 "Contaminación del D.F. reclamo la aplicación por
 "primera vez y en perjuicio de la quejosa, del
 "artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental del D.F.
 "a través de la expedición del Oficio
 "E/CO2/DGPCC/5325 de fecha 24 de abril de 1998,
 "mismo que también se reclama por vicios propios,
 "así como la aplicación por primera vez del artículo
 "10 del Acuerdo que establece el listado de obras o
 "actividades que requieren autorización de impacto
 "ambiental, las modalidades para su evaluación y
 "los formularios e instructivos aplicables.--- D) Del
 "C. Secretario del Medio Ambiente y del Director
 "General de Prevención y Control de la
 "Contaminación, reclamo la expedición del oficio



"E/CO2/DGPCC/5325 de fecha 24 de abril de 1998,
"misma que se anexa al presente ocurso como
"anexo número 2, por virtud del cual ordena la
"suspensión de toda obra relacionada con el
"proyecto denominado CENTRO COMUNITARIO
"MAGUEN DAVID, A.C., consistente en sinagoga,
"restaurante, salones de recreación, salas de
"juntas, aulas de cómputo, salón de fiestas,
"auditorio, salón de cursos de baile, música,
"pintura, fotografía, talleres de mantenimiento,
"colegio con instrucción maternal, kinder,
"preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria,
"gimnasio techado, laboratorios, talleres y
"estacionamiento, en el predio ubicado en [REDACTED]
[REDACTED] No. [REDACTED] Colonia [REDACTED]
[REDACTED] Delegación [REDACTED]
[REDACTED] a excepción de las obras consistentes en
"asegurar el talud sobre el que se encuentra la calle
"de [REDACTED] en el tramo correspondiente
"al frente del predio. -- Asimismo reclamo de las
"autoridades citadas en este inciso de
"procedimiento administrativo de sanción contra la
"congregación Maguen David A.C., en virtud de
"haber iniciado las obras de construcción del
"proyecto denominado CENTRO COMUNITARIO
"MAGUEN DAVID. -- Todo lo anterior bajo el
"argumento de que no se cuenta con la
"autorización de Impacto Ambiental
"correspondiente; de las dos autoridades

E F
CION
OS M
ALA

"mencionadas se reclaman asimismo todas las
 "consecuencias, efectos, cumplimiento y ejecución
 "de dicho acto, reclamándose también la inminente
 "clausura de la obra. Ya sea que dichas
 "consecuencias, efectos, cumplimiento y ejecución
 "se lleven a cabo por sí mismos o por conducto de
 "sus subordinados, inspectores o comisionados
 "para ese objeto con o sin el auxilio de la fuerza
 "pública. --- E) Del C. Secretario del Medio
 "Ambiente y del Director General de Prevención y
 "Control de la Contaminación se reclama asimismo
 "la aplicación por primera vez del acuerdo que
 "establece el listado de obras o actividades que
 "requieren autorización del impacto ambiental, las
 "modalidades para su evaluación y los formularios
 "e instructivos aplicables, publicado en la Gaceta
 "Oficial del Distrito Federal con fecha 7 de abril de
 "1997, así como las consecuencias y efectos de la
 "aplicación del artículo décimo del mencionado
 "acuerdo."

SEGUNDO.- La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas en su perjuicio, las consagradas en los artículos 1°, 3°, 14, 16, 17, 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y refirió los antecedentes y los conceptos de violación que a continuación se transcriben:

"1.- La precitada quejosa es comodataria del predio
 "número [REDACTED] de [REDACTED]"



"Colonia [REDACTED]

Delegación

"2.- Con el propósito de construir el predio objeto
"del comodato a que se refiere el párrafo que
"antecede, el Centro Comunitario Maguen David y
"una vez satisfechos todos y cada uno de los
"trámites y requisitos legales contemplados en las
"leyes de la materia, el 24 de octubre de 1995, el
"Registro del Plan Director para el Desarrollo
"Urbano del Distrito Federal, dependiente de la
"Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
"expidió la constancia de zonificación de uso de
"suelo número CZ-088166, folio 24255, que anexo a
"ese ocuso como número 3.--- 3.- Como
"seguimiento a los trámites indispensables para la
"obtención de la licencia de construcción, el 27 de
"noviembre de 1995, se solicitó a la Delegación
"Cuajimalpa de Morelos, Subdelegación de
"Desarrollo Urbano y Obras, del Departamento del
"Distrito Federal, expidiera la licencia de uso de
"suelo para la construcción del centro
"comunitario.--- 4.- En debida contestación, el Sub-
"delegado de Desarrollo Urbano y Obras de la
"Delegación Cuajimalpa de Morelos, del
"Departamento del Distrito Federal, expidió la
"licencia de uso de suelo número L.US./019/95/05,
"que anexo a este ocuso como número 4.--- 5.-
"Con fecha 16 de junio de 1997, el Subdelegado de
"Desarrollo Urbano y Obras de la Delegación

"Cuajimalpa de Morelos, otorgó, la constancia de
 "uso de suelo, alineamiento y número oficial, con
 "folio V2/666/97.--- 6.- Agotados los trámites
 "previstos en las leyes de la materia, el 24 de junio
 "de 1997, solicitamos a la Delegación Cuajimalpa
 "de Morelos el otorgamiento de la licencia de
 "construcción, y no fue sino hasta el 1° de agosto
 "del mismo año que se nos otorgó la referida
 "licencia, y con estricto apego a la licencia de
 "construcción, iniciamos los trabajos de
 "construcción del Centro Comunitario Maguen
 "David en el predio ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] Colonia [REDACTED]
 "Delegación [REDACTED]

[REDACTED] - 7.- Inopinadamente y sin previo aviso, el
 "20 de mayo de los corrientes, la Dirección General
 "de Prevención y Control de la Contaminación
 "notificó a la quejosa el oficio número
 "E/C02/DGPC/5325 de fecha 24 de abril de 1998,
 "consistente en la resolución que ordena la
 "suspensión de toda obra relacionada con el
 "proyecto denominado Centro Maguen David.--- 8.-
 "Toda vez que el proyecto de construcción Centro
 "Maguen David, fue iniciado bajo la vigencia de las
 "normas que estuvieron en vigor en 1995, y
 "tomando en consideración que no se puede
 "aplicar retroactivamente la Ley Ambiental, el
 "quejoso no está conforme con la precitada
 "resolución de fecha 24 de abril del año en curso,



"por estimar que se violan las garantías
 "individuales que se especifican en esta demanda,
 "en consecuencia, promuevo el presente juicio de
 "garantías, expresando los siguientes:
 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN --- PRIMERO.-
 "Violación del artículo 27 constitucional, y; --- El
 "artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental del
 "Distrito Federal establece lo siguiente: (se
 "transcribe)--- Ahora bien, el mencionado precepto
 "en la fracción indicada, impone injustificadamente
 "una carga a los particulares, que va más allá de lo
 "previsto en nuestra Constitución General de la
 "República.--- En efecto, siendo una nota esencial
 "de toda ley, su normatividad fincada en la razón,
 "resulta claro que todas las leyes que expida la
 "Asamblea de Representantes del Distrito Federal,
 "deben llevar fusionados esos elementos
 "esenciales y racionales, de lo contrario se
 "apartarían de la naturaleza ontológica de las leyes
 "para convertirse en actos formales de capricho o
 "de fantasía del órgano legislativo, pero no serían
 "leyes con la substancia que exige la carta
 "fundamental de la República.--- Bajo esta premisa,
 "resulta inconstitucional el mencionado numeral,
 "primero porque la Asamblea de Representantes se
 "aparta del texto constitucional al haber emitido el
 "artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental del
 "Distrito Federal, y porque impone cargas
 "injustificadas a los particulares.--- El citado

DE D.
 ACI.
 LEON Y
 SALU

"artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental del
 "Distrito Federal, establece de manera general y
 "caprichosa que todas las obras de más de 10,000
 "M2 de construcción u obras nuevas de más de
 "5,000 M2 para uso distinto al habitacional
 "requieren de autorización de impacto ambiental,
 "sin justificar lo anterior en forma congruente con
 "el texto constitucional.--- Como puede verse del
 "artículo 27 de la Constitución, en lo conducente se
 "establece: (se transcribe).--- Según el texto
 "expreso de la Constitución, lo que las autoridades
 "deben llevar a cabo es el dictado de medidas para
 "preservar y restaurar el equilibrio ecológico, esto
 "es, siguiendo una recta interpretación del texto
 "invocado, pero en la primera parte de dicho
 "artículo claramente fija un lineamiento
 "insoslayable consistente en que cuando la Nación
 "imponga a la propiedad privada modalidades, esto
 "debe obedecer al interés público, ya que de lo
 "contrario no se puede afectar la propiedad
 "privada.--- En el caso del artículo 27, fracción V, de
 "la Ley Ambiental del Distrito Federal, en realidad
 "se trata de la imposición de una modalidad muy
 "grave a la propiedad privada, pues por el hecho de
 "que no se cuente con una autorización de impacto
 "ambiental, que por lo demás es un concepto
 "indeterminado, no se puede gozar de los atributos
 "de la propiedad privada, ya que en forma
 "injustificada y totalmente apartada del texto



139
FORMA A-55

"constitucional se impone a la propiedad privada
"una modalidad que no se encuentra de ninguna
"forma justificada ni sustentada por la norma
"suprema.--- Lo anterior pone de relevancia la
"inconstitucionalidad de dicha disposición, pues en
"realidad se trata de una privación del derecho de
"propiedad en forma indeterminada con la cual se
"impide a la parte quejosa el ejercicio de ese
"derecho de propiedad, en realidad se trata de una
"disposición que bajo el disfraz de procurar la
"protección del ambiente, lo que hace es vulnerar
"en forma absoluta e indeterminada además de
"caprichosa, el derecho de propiedad.--- Según el
"texto de la Constitución, lo que las autoridades
"deben llevar a cabo es el dictado de medidas para
"preservar y restaurar el equilibrio ecológico, esto
"es siguiendo una recta interpretación del texto
"invocado se percibe que previamente a la
"imposición de las modalidades a la propiedad
"privada que alude nuestra Carta Magna se deben:-
"-- 1.- Realizar estudios reales y eficaces acerca de
"los recursos naturales a nivel local, regional y
"nacional, con el fin de sistematizar de forma
"congruente la información obtenida con las
"normas jurídicas que al respecto se emitan,
"porque sólo de esta manera se podrá imponer al
"particular diversas modalidades a su propiedad
"privada, con base en investigaciones serias y
"verídicas y no como mero resultado de la

DF
JCS
S. DE
LA

"arbitrariedad con la que actuó la Asamblea de
"Representantes del Distrito Federal al imponer una
"carga a la quejosa consistente en que previamente
"a la construcción de la obra citada se requiere la
"autorización del impacto ambiental por el simple
"hecho de caer en el supuesto de ser una obra
"nueva en predio de más de 5,000 M2, sin justificar
"la razón de que si son menos metros cuadrados
"de los señalados por dicha ley, no se requerirá la
"autorización mencionada.--- 2.- La Nación, según
 "se desprende del texto Constitucional, podrá
 "imponer a la propiedad privada las modalidades
 "que dicte el interés público pero tomando en
 "consideración:--- a)- Que dichas modalidades
 "deben ir encaminadas realmente para el caso que
 "nos ocupa en que precisamente se preserve y
 "conservar el equilibrio ecológico con base en un
 "conocimiento de la biodiversidad, tomando en
 "consideración los elementos que efectivamente
 "son dañinos para el medio ambiente,
 "estableciendo proyectos y programas de
 "investigación en forma general sobre los recursos
 "naturales y no decidir de forma arbitraria y carente
 "de fundamento jurídico-lógico alguno cargas a los
 "particulares que van más allá del fin perseguido
 "por la norma fundamental.--- b) Que dichas
 "modalidades, en realidad sean dictadas con base
 "en el interés público, y no sean el resultado de
 "meros intereses particulares, que tergiversan el



"verdadero significado de la conservación del
"medio ambiente.--- El artículo 27, fracción V, es
"inconstitucional en virtud de que el órgano
"legislativo que lo creó (Asamblea de
"Representantes del Distrito Federal), no tiene
"competencia para imponer las modalidades a las
"que se refiere al texto constitucional en el artículo
"27, ya que respecto a la manera legislativa en que
"puede constitucionalmente decretarse dicha
"modalidad, debe entenderse que esta facultad
"corresponde exclusivamente al Congreso de la
"Unión, por lo tanto esta ley que fue expedida por
"un órgano legislativo local y va más allá del
"espíritu del precepto constitucional invocado es
"contrario a la Constitución; lo anterior queda
"perfectamente claro con la siguiente
"jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de
"la Nación que al tenor literal dice:--- 'PROPIEDAD
"PRIVADA, MODALIDADES A LA.- (se transcribe).'-
"--- 'PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA.
"SÓLO PUEDEN IMPONERSE POR EL CONGRESO
"DE LA UNIÓN. (ACUERDO QUE RELOCALIZA Y
"AMPLIA LA ZONA DE ABASTECIMIENTO DE
"CAÑA DE AZÚCAR EN EL INGENIO DE LOS
"MOCHIS, SINALOA).- (se transcribe).'-
"--- 'PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDAD A LA.
"ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE
"CONFIGURE.- (se transcribe).'- --- De lo anterior se
"desprende que la norma jurídica secundaria,

"tomando en consideración al grado de jerarquía
 "que le corresponde según el orden normativo, no
"es válida constitucionalmente para imponer al
"particular la modalidad consistente en obtener
"autorización del impacto ambiental' si se trata de
 "obras nuevas en predios de más de cinco mil
 "metros cuadrados para uso distinto al
 "habitacional, máxime aún si es de forma
 "caprichosa y arbitraria, dicha carga o limitación al
 "derecho de propiedad privada garantizada por
 "nuestra Constitución, debió ser emitida por el
 "órgano legislativo federal, quien debía establecer
 "una norma jurídica general y permanente que
 "modificara esencialmente ese derecho, y no como
 "sucede en el caso que nos ocupa, ya que la
 "autoridad responsable aplicó preceptos que
 "entrañan naturaleza inconstitucional, en virtud de
 "que el órgano legislativo que produjo dichas
 "normas, no era el competente para imponer la
 "modalidad aludida, máxime aún de que es
 "necesario que previamente a la imposición de
 "ésta, el legislador debe tener todos y cada uno de
 "los elementos esenciales que funden
 "jurídicamente la carta correspondiente, y no sea
 "dicha norma jurídica producto irracional y
 "arbitrario de tal órgano.--- En este orden de ideas,
 "se debe precisar ante todo que la 'propiedad
 "privada' está garantizada por nuestra Constitución
 "como un 'derecho', y como tal, debe ser respetado





"por todas y cada una de las autoridades
"responsables, quienes carecen
"constitucionalmente de la facultad de imponer
"modalidades a la propiedad privada de la quejosa
"con base en las argumentaciones vertidas
"anteriormente y que conforman este primer
"concepto de violación, asimismo el artículo 10 del
"acuerdo que establece el listado de obras o
"actividades que requieren autorización de impacto
"ambiental, las modalidades para su evaluación y
"los formularios e instructivos aplicables, adolece
"de los mismos vicios de inconstitucionalidad, con
"lo que también debe concederse la Protección
"Constitucional en relación a dicho acuerdo, por lo
"que hace a su artículo décimo y demás relativos.---
"SEGUNDO.- Violación del artículo 14
"constitucional.--- El primer párrafo del artículo 14
"constitucional previene que: (se transcribe).---
"Esto significa para el caso en concreto y haciendo
"un enfoque respecto de los derechos adquiridos
"en el sentido de que si éstos entraron en el
"patrimonio del gobernado ya sea como bien,
"facultad o provecho, dicha situación no puede
"verse afectada ni por la voluntad de quienes
"intervinieron en el acto, ni por disposición legal en
"contrario.--- Las autoridades señaladas como
"responsables (Secretaría del Medio Ambiente a
"través de la Dirección General de Prevención y
"Control de la Contaminación.) hacen descansar la

"orden de suspensión de toda obra relacionada con
 "el proyecto Centro Maguen David a través de la
 "resolución de fecha 24 de abril del año en curso,
 "en falta de requisitos y documentación que
 "requiere la Ley Ambiental del 9 de julio de 1996,
 "según los artículos 22 y 27, fracciones I y V, así
 "como lo establecido por los artículos 6, 7 y 10 del
 "Acuerdo ya citado de fecha 7 de abril de 1997, por
 "virtud del cual se estableció el listado de obras o
 "actividades que requieren autorización del
 "impacto ambiental, las modalidades para su
 "evaluación y los formularios e instructivos
 "aplicables, sin que importe aplicarlas
"retroactivamente, puesto que dichas autoridades,
 "con la resolución antes aludida pretenden
 "desconocer, invalidar y modificar situaciones
 "jurídicas creadas y surgidas bajo el imperio de
 "normas que estuvieron en vigor cuando la hoy
 "quejosa solicitó y obtuvo la licencia de uso de
 "suelo de fecha 5 de diciembre de 1995 y como
 "consecuencia inmediata licencia de construcción.-
 "-- Bajo este orden de ideas se concluye que la Ley
 "Ambiental del Distrito Federal misma que entró en
 "vigor el 10 de julio de 1996, así como el acuerdo
 "antes citado son posteriores a la expedición de la
 "licencia de uso de suelo, por lo que no era
 "necesario el estudio de impacto ambiental para
 "poder solicitar dicha licencia, tan es así que ésta
 "fue otorgada, porque la quejosa cumplía



"cabalmente con todos y cada uno de los
"requisitos que la legislación correspondiente le
"imponía, por eso es absurdo que se aplique
"retroactivamente en perjuicio de ésta los
"ordenamientos mencionados.--- Resulta
"ostensible la inconstitucional aplicación
"retroactiva de la actual Ley Ambiental si se toma
"en cuenta que al solicitar la Constancia de
"Zonificación núm. C2-08166, folio 24255 y Licencia
"de Uso de Suelo núm. CUS/019/95/05, estuvieron
"en vigor otras leyes y reglamentos que no
"contemplan el requisito de presentar previamente
"el estudio del Impacto Ambiental que pretenden
"las autoridades responsables.--- En estas
"condiciones, resulta evidente que la resolución de
"fecha 24 de abril de 1998, viola la garantía de
"irretroactividad de las normas jurídicas generales,
"porque está obrando sobre el pasado para destruir
"situaciones creadas bajo el imperio y la
"legitimidad de las normas reglamentarias para el
"uso de suelo y que sirvieron de apoyo a la
"Constancia de Zonificación de uso de suelo que
"expidió el Jefe del Registro del Plan Director para
"el Desarrollo Urbano del Distrito Federal, lo que
"resulta inadmisibles y contrario a la garantía de
"irretroactividad que consagra el artículo 14
"constitucional, que es precisamente la privación y
"desconocimiento de derechos adquiridos
"conforme a la normatividad que estuvo vigente en

"1995, mediante la aplicación retroactiva de la
 "normatividad nueva, o sea el artículo 27 de la Ley
 "Ambiental de 9 de julio de 1996, que entró en vigor
 "el día 10 de julio de 1996, siguiente día al que fue
 "publicada en el Diario Oficial de la Federación así
 "como del acuerdo antes citado, destruyendo así
 "las situaciones jurídicas concretas nacidas
 "legítimamente bajo el Plan de Desarrollo Urbano
 "para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, Versión
 "1987, con creación de derechos específicos a
 "favor de la quejosa.--- Cobran aplicabilidad en el
 "tema aquí tratado, las siguientes ejecutorias de la
 "H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.--- (se
 "transcribe).--- 'RETROACTIVIDAD, TEORÍAS
 "SOBRE LA.- (se transcribe).'-
 "'RETROACTIVIDAD.- (se transcribe).'-
 "'RETROACTIVIDAD DE LA LEY.- (se transcribe).'-
 "'RETROACTIVIDAD.- (se transcribe).'- Por todo lo
 "anterior queda claro que hay una violación directa
 "y abierta por parte de las autoridades
 "responsables al suspender toda obra relacionada
 "con el Centro Comunitario Maguen David,
 "basando dicha suspensión en una ley que no
 "existía cuando la quejosa adquirió las facultades
 "correspondientes, derivadas del uso de suelo y de
 "la constancia de zonificación.--- TERCERO.-
 "Violación de los artículos 14, 16 y 17
 "constitucionales.--- El segundo párrafo del artículo
 "14 constitucional consagra que:--- (se transcribe).-



-- Por otra parte, el artículo 16 constitucional, en
"su primer párrafo establece que:--- (se
"transcribe).--- Por último, el artículo 17 de la norma
"fundamental ordena lo siguiente:--- (se
"transcribe).--- Es claro que la resolución de fecha
"24 de abril del año en curso, es violatoria de los
"preceptos constitucionales invocados en virtud de
"que:--- 1.- De dicha resolución se desprende que
"previamente a que la autoridad resolviera
"suspender toda obra relacionada con Centro
"Maguen David, A.C., existió una denuncia
"correspondiente al inicio de obra y trabajos de
"construcción en el predio denominado Loreto y La
"Palma, ubicado en [REDACTED]
"número [REDACTED] Colonia [REDACTED]
[REDACTED] 2.- La
"denuncia antes mencionada jamás fue dada a
"conocer a la quejosa, quien era la realmente
"afectada por esta situación, máxime que hasta el
"momento se ignora quien promovió la misma, y
"los términos en que dicha denuncia se interpuso.--
"- Únicamente el resultado primero de la resolución
"combatida indica que fue una Asociación Civil
"quien promovió dicha denuncia, acompañando
"una serie de documentos con los cuales nunca se
"dio vista a la quejosa para combatir tanto los
"argumentos en los que se basó la denuncia
"referida ni objetar documentos que a la misma se
"acompañaron.--- Por lo tanto queda claro que la

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA
FALSA

"autoridad responsable, o sea el Director General
 "de Prevención y Control a la Contaminación, se
 "basó únicamente en una 'denuncia' promovida por
 "una Asociación Civil, sin respetar la garantía de
 "audiencia que posee todo gobernado, jamás se le
 "dio respecto de esa denuncia vista alguna, y
 "obviamente al no tener conocimiento de ésta
 "durante su tramitación, no existió oportunidad
 "alguna para hacer valer las defensas y
 "excepciones correspondientes, es decir, se
 "procedió a dictar resolución sin estar fijada
 "realmente la litis respecto de la falta de requisitos
 "necesarios para contar o no con la autorización
 "del impacto ambiental indicada.--- Los particulares
 "tienen sin excepción alguna, el derecho de acudir
 "ante un Tribunal ya sea judicial, administrativo, o
 "bien del trabajo, para que se le imparta justicia en
 "los términos y condiciones que impongan las
 "leyes, por lo tanto no es lícito que la Secretaría del
 "Medio Ambiente, a través de la Dirección General
 "de Control y Prevención de la Contaminación funja
 "como Tribunal parcial lo cual es inconstitucional,
 "máxime que dicho órgano de la administración
 "pública local carece de la naturaleza que tienen
 "los tribunales que deben impartir justicia a los que
 "se refiere la Constitución, y si bien es cierto que
 "ante dichos órganos pueden llevarse a cabo
 "determinados procedimientos de carácter
 "administrativo éstos deben circunscribirse a



"ciertas normas jurídicas respetando las garantías
"de audiencia y legalidad y no actuar de forma
"arbitraria sin fundamentación ni motivación
"alguna del por qué de su resolución.--- La garantía
"de audiencia como tal implica que el gobernado
"disponga de un plazo razonable para contradecir
"las pretensiones de la autoridad, oponer defensas,
"rendir pruebas y alegar la improcedencia o
"ilegalidad de la denuncia interpuesta, situación
"que en el caso que nos ocupa jamás aconteció.---
"Desde el día en que la Secretaría del Medio
"Ambiente a través de la Dirección General del
"Medio Ambiente tuvo conocimiento de la denuncia
"promovida, estaba obligada a notificarle tal
"circunstancia a la hoy quejosa, situación que
"nunca sucedió, y no es válido decir por parte de
"estas autoridades que el hecho de que se haya
"efectuado una visita de verificación extraordinaria
"y se haya levantado el acta correspondiente tiene
"el carácter de haberse respetado las garantías
"mencionadas en atención a:--- a) Se trata de
"situaciones distintas, la denuncia promovida por
"la Asociación Civil en contra del inicio de obra y
"trabajos de construcción del predio antes
"descrito, y otra la visita de verificación
"extraordinaria y el acta levantada respecto de la
"visita.--- b) La diligencia entendida con el Director
"Responsable Juan Luis Antonio Navarro Montero,
"fue respecto de la visita de verificación

"extraordinaria, y con base en esta visita se
 "hicieron las manifestaciones correspondientes, y
 "nunca fue respecto de la denuncia interpuesta.---
 "c) En ningún momento se le hizo saber al Director
 "responsable de obra ni al representante legal de la
 "Quejosa que estuviese tramitando una denuncia
 "por parte de una asociación civil contra el inicio
 "de obra y trabajos de construcción del predio
 "antes descrito.--- d) En esa visita no se conoce la
 "causa real y por tanto el quejoso no puede
 "defenderse de algo que ignora.--- Por lo tanto es
 "obvio que las autoridades responsables se
 "basaron únicamente en lo argumentado por los
 "denunciantes y quisieron encubrir a través de las
 "manifestaciones efectuadas por el Director
 "responsable de obra respecto únicamente del acta
 "de visita de verificación extraordinaria, que se
 "había dado vista a la hoy quejosa, lo que nunca
 "sucedió, violando así de forma abierta la garantía
 "de audiencia de ésta.--- Es absurdo que la
 "autoridad responsable señale en el considerando
 "cuarto de la resolución combatida, que para dictar
 "ésta, tomó en cuenta únicamente las actuaciones
 "del Director responsable de obra, mismas que
 "reitero, fueron resultado del acta de visita de
 "verificación extraordinaria, y no de la denuncia en
 "la cual se basó realmente la resolución del 24 de
 "abril de 1998.--- Por medio de la resolución
 "combatida se está afectando a la quejosa respecto

EXPRIME O
 JUSTICIA
 SECRETARÍA
 A FINER



"de sus garantías individuales en atención a:--- a)
"Se le está privando de su derecho de usar y
"construir en el predio que es de su propiedad para
"un fin lícito, sin que se haya seguido juicio ante
"los tribunales previamente establecidos, además
"de que en el procedimiento iniciado por la
"denuncia promovida por la Asociación Civil,
"nunca se cumplieron las formalidades esenciales
"al procedimiento y conforme a las leyes expedidas
"con anterioridad al hecho.--- b) La hoy quejosa fue
"molestada sin mandamiento escrito de autoridad
"competente, ya que la Dirección General de
"Prevención y Control de la Contaminación no es
"competente para ejecución y modalidades
"impuestas por una legislación que es
"inconstitucional, además de que nunca se fundó y
"motivó realmente la causa legal del procedimiento
"que dio por resultado la resolución de fecha 24 de
"abril de 1998.--- Lo anterior queda plenamente
"reiterado por los siguientes criterios
"jurisprudenciales que a saber son:
"COMPETENCIA. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
"CONSTITUCIÓN.- (se transcribe).---
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- (se
"transcribe).--- FUNDAMENTACIÓN Y
"MOTIVACIÓN DE LOS MANDAMIENTOS DE LA
"AUTORIDAD. ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.-
"(se transcribe).--- Es claro que la motivación de
"un acto de autoridad consiste en el razonamiento

"externando las consideraciones relativas las
 "circunstancias de hecho, que formule la autoridad
 "para establecer la adecuación del caso concreto a
 "la hipótesis legal, circunstancia que en efecto
 "jamás se da en la resolución combatida.--- Aunque
 "la autoridad responsable indique en la resolución
 "combatida una serie de normas que según dicha
 "autoridad son aplicables al caso concreto, nunca
 "existe adecuación entre los motivos aducidos por
 "la responsables y las normas aplicables, en tal
 "situación queda de manifiesto la falta de
 "motivación, puesto que es necesario señalar con
 "precisión las circunstancias especiales que se
 "hayan tomado en consideración, y no basta
 "argumentar a través de considerandos alejados
 "del sentido mismo que prevé la norma
 "fundamental que en efecto se haya hecho una
 "correcta motivación de la resolución recurrida.---
 "c) La hoy quejosa fue afectada a través de una
 "resolución que no fue producto de la
 "imparcialidad, sino que se dio con base en
 "intereses personales de la denunciante, a los
 "cuales las autoridades responsables protegieron
 "causándole daños y perjuicios notables al Centro
 "Comunitario Maguen David, A.C.--- De lo anterior
 "se desprende que las autoridades responsables
 "desconocen la normatividad constitucional
 "indicada, violando las garantías consagradas a
 "favor de los gobernados, consistentes en



"legalidad y audiencia.--- CUARTO.- Violación al
"artículo 1° de la Constitución. El artículo 1°
"Constitucional establece: (se transcribe).--- La
"resolución de fecha 24 de abril del año en curso
"por la que se suspende la obra relacionada con el
"Centro Comunitario Maguen David por carecer de
"autorización de impacto ambiental, y la cual está
"fundada en el artículo 27 fracción V de la Ley
"Ambiental y los artículos 4°, fracción IV, 5°, 6° y
"10° del acuerdo que establece el listado de obras y
"actividades que requieren autorización de impacto
"ambiental, las modalidades para su evaluación y
"los formularios e instructivos aplicables de fecha
"7 de abril de 1997, vulneran el precepto
"constitucional citado en atención a que: El artículo
"27, fracción V, de la Ley Ambiental establece que:-
"-- (se transcribe) --- El artículo 4°, fracción IV, del
"multicitado acuerdo señala que:--- (se transcribe)--
"- El artículo 5°, fracción II, inciso 6°, del acuerdo
"citado señala que:--- (se transcribe).--- El artículo
"6° del acuerdo referido, establece que en el suelo
"urbano de acuerdo con el artículo 28, fracción II,
"de la Ley Ambiental, se requiere autorización de
"impacto ambiental mediante el trámite o
"modalidad respectiva a las obras y actividades
"determinadas en el listado que se acompaña al
"presente ocuso como anexo 3.--- El artículo 10°
"del mismo ordenamiento antes indicado se obliga
"al particular a la elaboración de la manifestación o

"estudio de impacto ambiental, a través de un
 "instructivo que en dicha disposición se detalla.---
 "De todos y cada uno de los preceptos antes
 "citados se concluye que: 1) Dichas disposiciones
 "vulneran la garantía de igualdad que previene
 "nuestra Carta Magna.--- 2) No existe razón alguna
 "para que el legislador local, es decir la Asamblea
 "de Representantes, al emitir la Ley Ambiental, y
 "por otra parte la Secretaría del Medio Ambiente, al
 "emitir el acuerdo que establece el listado de obras
 "o actividades que requieren autorización de
 "impacto ambiental, las modalidades para su
 "evaluación y los formularios e instructivos
 "aplicables determinen qué obras nuevas en
 "predios de más de 5,000 M2. tenga que obtener
 "autorización del impacto ambiental.--- 3) No es
 "jurídico ni lógico determinar que obras nuevas de
 "menos de 5,000 M2. O sea de 4,999 M2 no
 "requieran el correspondiente estudio de impacto
 "ambiental, no existe por lo tanto razón alguna para
 "esta imposición al particular, que lo coloca en un
 "plano desigual frente a otros gobernados que
 "pretenden crear centros educativos, como el caso
 "que nos ocupa.--- 4) Existe pues un trato desigual
 "entre los gobernados que tengan un proyecto de
 "Escuela en un predio de 4,999 M2 los cuales no
 "requieren la autorización indicada y aquéllos que
 "estén en el supuesto de los artículos combatidos.-
 "-- No existe igualdad jurídica, misma que se



"concibe con relación en que en las relaciones
"jurídicas no deben hacerse ciertas diferencias,
"esto significa que las instituciones que crean y
"aplican el derecho no pueden tomar en
"consideración, en el trato de individuos,
"diferencias excluidas por el orden jurídico.--- El
"funcionamiento de la igualdad jurídica tal y como
"ha sido explicada, corresponde fundamentalmente
"a la exigencia del principio de la aplicación regular
"de normas jurídicas bien motivadas.--- Es absurdo
"que los preceptos violatorios del artículo 1° de la
"Constitución desconozcan esta norma
"fundamental y bajo el postulado de cuestiones del
"medio ambiente, provoquen un trato desigual
"entre los gobernados que se encuentra bajo un
"mismo supuesto, encubriendo únicamente
"intereses personales.--- Independientemente de lo
"anterior se debe atender a que la hoy quejosa
"obtuvo la licencia de uso de suelo, construcción y
"constancias de zonificación, debido a que cumplió
"cabalmente con los requisitos que la ley y la
"autoridad correspondiente consideró necesarios
"para el inicio de la obra denominada Centro
"Maguen David, no es válido que las autoridades
"responsables desconozcan las licencias
"otorgadas para el efecto de usar y construir en el
"predio en comento, por lo tanto a los gobernados
"que poseen las licencias correspondientes debe
"dárseles trato igual de quienes ya las tienen, a

SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FERIA
3 DE MARZO DE 1999
AL A

"diferencia de aquéllos que carecen de estos
 "requisitos, a los cuales aún suponiendo sin
 "conceder si se les debería aplicar la exigencia del
 "impacto ambiental.--- QUINTO.- Violación del
 "artículo 25 constitucional.--- El artículo 25
 "constitucional dispone:--- (se transcribe).--- La
 "resolución de fecha 24 de abril de los corrientes
 "vulnera este precepto constitucional en virtud de
 "las siguientes consideraciones:--- a) La resolución
 "combatida hace por el hecho de que no se
 "cumplieron con los requisitos necesarios para la
 "autorización de impacto ambiental, y bajo este
 "disfraz atenta con un sin número de fuentes de
 "trabajo e ingresos que indubitadamente
 "beneficiarían a la Economía y desarrollo nacional.
 "-- b) Al favorecer con dicha resolución a un grupo
 "de individuos que con el carácter de 'asociación
 "civil' promovieron la denuncia ya citada, se
 "perjudica de forma abierta y descarada a una gran
 "parte de ciudadanos en atención a que:--- 1.- Al
 "suspenderse la obra relacionada con el Centro
 "Maguen David les priva de trabajo lícito y honesto
 "a obreros, ingenieros, arquitectos entre otros, y
 "asimismo les priva del salario correspondiente por
 "el ejercicio de su trabajo.--- 2.- Al suspenderse la
 "obra descrita, impide que se concluya un proyecto
 "que daría un crecimiento económico notable que
 "repercutiría en la Nación a través de diversas
 "fuentes de ingresos, así como el hecho indudable



"de que se fomentaría la creación de nuevos
"empleos, mismos que se verían favorecidos por el
"sueldo y prestaciones correspondientes.--- En
"este orden de ideas, y tomando en consideración
"que el Estado al tener la rectoría del desarrollo
"nacional, debe impulsar bajo criterios de equidad
"social y productividad a las empresas de los
"sectores sociales y privados con el fin primordial
"de que se de una expansión económica que
"provea a los gobernados de una base sólida y
"eficiente en aras del bien común, y un ejemplo de
"esto es la creación de fuentes de trabajo.--- En
"atención a la situación actual que vive el país es
"claro que los gobernantes están obligados a
"procurar un desarrollo integral basado en una
"estructura jurídica sana que conlleve al constante
"mejoramiento económico, social y cultural del
"pueblo.--- Por lo tanto, el suspender la obra del
"Centro Comunitario Maguen David, A.C. es un
"ejemplo claro de violación del artículo 25
"constitucional, pues no nada más se suspende la
"obra, sino también empleos ya otorgados así
"como futuras fuentes de trabajo y también
"obviamente de ingresos.--- Todas las cuestiones
"ecológicas y de conservación del medio ambiente
"no deben ser usadas por las autoridades
"responsables como medios por virtud de los
"cuales encubran intereses personales, ya que
"dichas cuestiones son tan importantes como lo es

TE DE
NACIONE
7002 14
3444

"un desarrollo económico sano, y si un sector
"privado como el caso que nos ocupa realiza
"proyectos tendientes a crear empleos y a fomentar
"el crecimiento económico nacional, dichas
"autoridades están obligadas a no estorbar en esta
"función, máxime que ésta es de interés público.---

"SEXTO.- Violación del artículo 3º Constitucional. --

"- El artículo 3º Constitucional prevé en su
"fracciones III y IV. --- (se transcriben). --- Los fines
"a los que hace alusión este precepto
"constitucional son los siguientes:--- 1.- Desarrollar
"armónicamente todas las facultades del ser
"humano y fomentar en él, a la vez el amor a la
"patria, y la conciencia de la solidaridad
"internacional en la independencia y en la justicia.--

"- 2.- El criterio que orientará a esa educación se
"basará en los resultados del progreso científico,
"luchará contra la ignorancia y sus efectos.--- 3.- La
"educación será democrática como un sistema de
"vida promoviendo el constante mejoramiento
"económico, social y cultural del pueblo.--- La
"resolución recurrida atenta directamente contra
"estos fines, en el sentido de que al suspender la
"obra relacionada con el Centro Comunitario
"Maguen David, también se suspende el derecho de
"la quejosa a que pueda impartir educación en
"todos sus tipos y grados, así como también se
"suspende toda posibilidad de proveer a un
"desarrollo armónico de todas las facultades de



*"quienes pudieran ser sus alumnos, se suspenden
"a su vez la lucha contra la ignorancia y sobre todo
"no fomentaría un mejoramiento económico, social
"y cultural, situaciones que garantiza nuestra Carta
"Magna, y que son de eminente interés social.---
"Ahora bien, los actos que se atribuyen a todas y
"cada una de las responsables conculcan de
"manera directa en agravio de la quejosa, las
"garantías de los conceptos constitucionales
"transcritos, solicito a nombre de la quejosa el
"Amparo y Protección de la Justicia de la Unión."*

TERCERO.- El Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien por razón de turno le correspondió conocer de la demanda, en auto de once de junio de mil novecientos noventa y ocho, admitió la misma registrándola bajo el número de expediente 286/98.

Seguido el juicio en todos sus trámites legales, el cinco de octubre siguiente se celebró la audiencia constitucional respectiva y posteriormente se procedió a dictar sentencia, misma que terminó de engrosarse el día cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y cuyos puntos resolutive son los siguientes:

"PRIMERO.- Se sobresee en términos de los
"considerandos tercero y quinto.--- SEGUNDO.- La
**"justicia de la unión no ampara ni protege a Centro
"Maguen David, Asociación Civil, contra el acto que
"reclama del Director General de Prevención y**

**"Control de la Contaminación del Distrito Federal,
"consistente en la emisión del oficio
"E/CO2/DGPCC/5325 de veinticuatro de abril de mil
"novecientos noventa y ocho y su ejecución."**

Las consideraciones en que se sustentó la sentencia aludida, en lo que interesa dicen:

**"SEGUNDO.- Son ciertos los actos que se reclaman
"de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (en
"su denominación correcta), Presidente de la
"República y Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
"consistentes respectivamente en la expedición,
"promulgación y refrendo de la Ley Ambiental del
"Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la
"Federación el nueve de julio de mil novecientos
"noventa y seis, pues además de que así lo
"manifestaron las responsables en sus informes
"justificados (folios 86 a 92, 96 a 99 y 120 a 126), su
"certeza se acredita en términos de los artículos 86
"y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
"de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la
"tesis ejecutoria publicada en la Compilación de
"1988, Primera Parte, que a la letra dice:--- 'LEYES,
"NO SON OBJETO DE PRUEBA.- (se transcribe).'-
"También es cierto el acto que reclama del Director
"General de Prevención y Control de la
"Contaminación del Distrito Federal, consistente en
"la emisión del Oficio E/CO2/DGPCC/5325 de**



"veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y
"ocho, en que se aplicó el artículo 27, fracción V, de
"la Ley Ambiental del Distrito Federal, así como el
"numeral 10 del Acuerdo que establece el listado
"de obras o actividades que requieren autorización
"de impacto ambiental, las modalidades para su
"evaluación y los formularios e instructivos
"aplicables, pues además de que así lo reconoce en
"su informe justificado (folios 129 a 147), la quejosa
"anexó a su demanda el oficio del que se
"desprende su autoría (folios 38 a 43).-- Asimismo,
"son ciertos los actos consistentes en el inicio del
"procedimiento administrativo de sanción y la
"suspensión de la obra de construcción que
"defiende, pues tales actos derivan de forma
"directa e inmediata como consecuencias del oficio
"en comento (folio 42).--- TERCERO.- No es cierto el
"acto que se atribuye al Secretario del Medio
"Ambiente del Distrito Federal, consistente en la
"emisión del oficio E/CO2/DGPCC/5325 de
"veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y
"ocho, y sus consecuencias, pues además de que
"así lo expresa en su informe justificado, en el
"considerando anterior quedó demostrado que es
"responsabilidad de diversa autoridad.--- Por tanto,
"debe sobreseerse al respecto con fundamento en
"el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la
"Ley de Amparo.--- CUARTO.- De conformidad con
"el artículo 73 de la Ley de Amparo, a continuación

"se estudian las causas de improcedencia hechas
 "valer por las partes. --- a) La parte tercero
 "perjudicada manifiesta que en la especie se
 "actualiza la causal de improcedencia prevista por
 "el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el
 "numeral 4º, ambos de la Ley de Amparo, en virtud
 "de que si bien el señor Isaac Hamui Mussali se
 "ostenta como representante legal de la persona
 "moral denominada 'Comunidad Maguen David',
 "asociación civil, no acreditó realmente su
 "personalidad, pues la escritura ciento quince mil
 "trescientos cuarenta y dos, que exhibió con la
 "demanda, contiene el contrato de asociación civil
 "denominada Centro Maguen David , asociación
 "civil, no lucrativa (folio 226). --- Si bien es cierto
 "que la escritura a la que alude contiene el contrato
 "de asociación civil denominada Centro Maguen
 "David, asociación civil, no lucrativa (folios 50 a
 "76), celebrado, entre otros, por Isaac Hamui
 "Mussali, presidente de la asamblea general
 "ordinaria de asociados (folio 67) quien lleva la
 "representación legal de la asociación (folio 61), y
 "que en la demanda de garantías aparece
 "promovida por ese señor, en representación de
 "Comunidad Maguen David, asociación civil; lo
 "cierto es que se aprecia que se trata de una misma
 "persona moral, pues de autos se advierte el uso
 "indistinto de centro, centro comunitario,
 "comunidad y congregación, los cuales son





"**sónónimos.**--- En otros términos, al haber utilizado
"la palabra 'comunidad' en vez de 'centro', en la
"demanda de garantías, únicamente da lugar a una
"rectificación del nombre, mas no al
"sobreseimiento del juicio por falta de
"personalidad, pues de la escritura constitutiva
"identificada se aprecia que lo correcto es el
"segundo vocablo; el contrato privado de
"comodato también está celebrado por el Centro
"Maguen David, asociación civil, como
"comodataria; y la licencia de construcción está
"expedida igualmente a la persona moral bajo esa
"denominación (folios 45 a 47). El uso indistinto de
"los vocablos en comento también se aprecia en el
"oficio E/CO2/DGPCC/5325 de veinticuatro de abril
"de mil novecientos noventa y ocho (folios 38 a 43).
"-- b) Por su lado, el Jefe de Gobierno del Distrito
"Federal, estima que se actualiza la causa de
"improcedencia prevista por el artículo 73, fracción
"XI, de la Ley de Amparo, porque aceptó
"tacitamente el oficio que combate, ya que fue
"expedido el veinticuatro de abril de mil
"novecientos noventa y ocho, y notificado a
"Heráclito Concepción López el veinte de mayo del
"mismo año (folios 136 a 139).--- En virtud de que el
"argumento que plantea la responsable tiene
"relación con la diversa causal de improcedencia
"prevista en el artículo 73, fracción XII, párrafo
"primero, de la misma Ley, el estudio se contrae a

"ésta.--- Resulta que si el oficio impugnado le fue
 "notificado el veinte de mayo de mil novecientos
 "noventa y ocho (folio 44), de conformidad con el
 "artículo 21 de la Ley de Amparo, surtió sus efectos
 "el veintiuno de ese mes, y hasta el día siguiente
 "empezó a correr el término de quince días para
 "interponer demanda de garantías: del veintidós de
 "mayo al quince de junio del mismo año,
 "descontando los días inhábiles (veintitrés,
 "veinticuatro, treinta y treinta y uno de mayo; y seis
 "y siete de junio). Por tanto la demanda es
 "oportuna pues se presentó el once de junio de mil
 "novecientos noventa y ocho, esto es, el décimo
 "quinto día del término legal.--- c) Tanto la tercero
 "perjudicada como la responsable referida invocan
 "la causal de improcedencia prevista por el artículo
 "73, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de
 "que no cuenta con un derecho legítimamente
 "tutelado porque no hay un acto formal y concreto
 "de aplicación que afecte sus intereses jurídicos, y
 "porque si bien la quejosa manifiesta ser
 "comodataria del predio cuya construcción
 "defiende, no exhibió documento legal con el que
 "acredite dicha posesión derivada. Además, alega
 "la tercero perjudicada que conforme al artículo
 "2501 del Código Civil para el Distrito Federal, el
 "comodatario únicamente adquiere el uso pero no
 "los frutos y acciones de la cosa prestada, y por
 "tanto no repercute en su patrimonio jurídico, sino



RTE
NACI
REVIS
SALZ

"en el del propietario del inmueble (folios 130 a 135
"y 297 a 302).--- El oficio E/CO2/DGPCC/5325 de
"veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y
"ocho, es precisamente un acto concreto de
"autoridad que da la oportunidad a la quejosa de
"defender los derechos jurídicamente tutelados por
"la licencia de construcción con que cuenta (folios
"45 y 46).--- Contrariamente a lo que alega la
"responsable, el oficio en comento constituye un
"acto de autoridad, pues conlleva las
"características inherentes a tales actos, esto es,
"unilateralidad, imperatividad y coercitividad, pues
"es suficiente la voluntad del Director General de
"Prevención y Control de la Contaminación de la
"Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal,
"como órgano estatal frente a la quejosa, como
"gobernada subordinada, para que se haga
"obedecer lo que ordena, esto es, la suspensión de
"toda obra de construcción relacionada con el
"Centro Maguen David, así como el requerimiento
"de presentar la manifestación de impacto
"ambiental correspondiente, el inicio del
"procedimiento administrativo de sanción y el
"requerimiento de publicar el resumen del proyecto
"en un diario de circulación nacional (folio 42).--- Es
"aplicable al caso, contrario sensu, la tesis
"ejecutoria consultable en el Semanario Judicial de
"la Federación, Octava Época, Tomo VIII,
"Diciembre:--- 'LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.

"DEBE ACREDITARSE SU EXISTENCIA PARA QUE
 "PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA
 "ORDEN DE SUSPENSIÓN DE OBRA Y
 "EJECUCIÓN.- (se transcribe).--- También resulta
 "aplicable la tesis ejecutoria visible en el
 "Semanario Judicial de la Federación, Octava
 "Época, Tomo VII, Junio:--- 'CLAUSURA Y
 "DEMOLICIÓN, ÓRDENES DE LA LICENCIA DE
 "CONSTRUCCIÓN ES NECESARIA PARA
 "ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL
 "AMPARO.- (se transcribe).--- Ahora, si bien la
 "quejosa promovió su demanda de garantías en
 "calidad de comodataria del predio en donde lleva a
 "cabo la construcción de la obra referida, y que a la
 "fecha en que la tercero perjudicada manifestó
 "diversas causales de improcedencia, aun no había
 "exhibido documento legal para acreditar la calidad
 "con que se ostentaba; el cinco de octubre de mil
 "novecientos noventa y ocho, exhibió en copia
 "certificada contrato privado de comodato con el
 "que la acredita (folios 297 a 302).--- Con ese
 "contrato demuestra que no es una simple
 "detentadora de la posesión, esto es, poseedora de
 "hecho, sino que posee jurídicamente en virtud de
 "la posesión derivada que surge por el contrato.---
 "El contrato de comodato es una causa
 "jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que
 "la ejerce alguno de los derechos o atributos de la
 "propiedad (usar, disfrutar, poseer), o aquéllos que



"son característicos y exclusivos de la posesión
"derivada (usar y disfrutar el bien, pero no disponer
"de él).--- Por tanto la posesión que tiene la quejosa
"es jurídica y en consecuencia protegible.--- Ahora,
"si bien el artículo 2501 del Código Civil para el
"Distrito y Territorios Federales en Materia Común
"y para toda la República en Materia Federal
"establece que el comodatario adquiere el uso,
"pero no los frutos y acciones de la cosa
"prestada, ello no implica que no pueda
"disfrutarlos, pues a través del contrato surge
"precisamente la posesión derivada de una cosa no
"fungible, mueble o inmueble, cuya posesión es
"jurídicamente protegible.--- Para precisar lo
"anterior es conveniente tener en cuenta que el
"contrato de comodato es aquél por el que uno de
"los contratantes se obliga a conceder
"gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el
"otro contrae la obligación de restituirla
"individualmente (artículo 2497 del Código Civil).---
"Entonces, se trata de un contrato gratuito, a pesar
"de que genera obligaciones a cargo de una y otra
"parte, traslativo de uso, duradero o de tracto
"sucesivo, consensual, porque no requiere
"formalidades, aunque para evitar confusiones es
"conveniente que sea por escrito; y es intuitu
"personae por lo que toca a la persona del
"comodatario, ya que éste sin permiso del
"comodante no puede conceder el uso de la cosa a

"tercera persona (artículo 2500 del código citado) y,
 "además el contrato termina por la muerte del
 "comodatario (artículo 2515).--- Es necesario
 "analizar el contrato de comodato exhibido por la
 "quejosa únicamente para determinar la
 "procedencia del juicio que nos ocupa, para ver si
 "con ese documento efectivamente acredita su
 "interés jurídico.--- Al efecto es aplicable la tesis
 "ejecutoria consultable en el Semanario Judicial de
 "la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
 "V, Mayo de 1997:--- 'INTERÉS JURÍDICO. ES
 "NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL
 "QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN
 "CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA
 "DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE
 "GARANTÍAS.- (se transcribe).--- Pues bien, el
 "contrato privado aludido está celebrado por una
 "parte por Maguen David , asociación civil, como
 "comodante, y por la otra parte Centro Maguen
 "David, asociación civil, como comodataria; cuya
 "cláusula cuarta dice: 'La comodante faculta y
 "autoriza expresamente a la comodataria para que
 "realice todas las mejoras y construcciones que
 "sean necesarias en los inmuebles materia del
 "comodato a efecto de contar en los mismos con
 "un centro comunitario y colegio, así como las
 "instalaciones que le sean inherentes' (folio 299).---
 "En estas condiciones es evidente que la quejosa
 "demuestra su interés jurídico.--- d) El Jefe de



"Gobierno considera que se actualiza la causa de
 "improcedencia prevista en el artículo 73, fracción
 "VI, de la ley de la materia, en virtud de que la ley
 "impugnada no tiene el carácter de autoaplicativa,
 "pues se trata de un ordenamiento legal que por su
 "sola expedición no causa perjuicio a la quejosa,
 "sino que se requiere de un acto posterior de
 "autoridad (folio 121).--- Es cierto que la Ley
 "Ambiental del Distrito Federal, en el caso
 "planteado, no resulta ser una ley autoaplicativa,
 "como bien dice la responsable; sin embargo, la
 "quejosa no la impugnó con ese carácter, sino con
 "el de heteroaplicativa, con motivo de un acto
 "concreto de aplicación contenido en el oficio
 "E/CO2/DGPCC/5325 de veinticuatro de abril de mil
 "novecientos noventa y ocho; consecuentemente el
 "planteamiento de la autoridad es desafortunado.---
 "e) Finalmente la autoridad multireferida,
 "argumenta que también se actualiza la causa de
 "improcedencia prevista por el artículo 73, fracción
 "XV, de la Ley de Amparo, en virtud de que la
 "quejosa debió agotar el recurso administrativo de
 "inconformidad previsto en los artículos 108 a 128
 "de la Ley del Procedimiento Administrativo del
 "Distrito Federal, o bien, el juicio de nulidad
 "establecido en el artículo 23 de la Ley del Tribunal
 "de lo Contencioso Administrativo del Distrito
 "Federal, para cumplir con el principio de
 "definitividad (folios 139 a 146).--- Para estudiar

TE DE
 NACIO
 DOS DE
 SALA

"esta última causa de improcedencia cabe recordar
 "que el principio de definitividad que se debe
 "cumplir previamente a la interposición de una
 "demanda de garantías, tiene excepciones, y la
 "quejosa se encuentra en una de ellas, pues
 "impugna, entre otros actos, el artículo 27, fracción
 "V, de la Ley Ambiental del Distrito Federal, razón
 "por la cual no estaba obligada a agotar ningún
 "medio de defensa para promover su demanda.---
 "Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia,
 "consultable con el número 343 en el Apéndice al
 "Semanario Judicial de la Federación, 1917 - 1995,
 "Tomo I:--- 'AMPARO CONTRA LA
 "INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY
 "RECURSOS ORDINARIOS.- (se transcribe).---
 "QUINTO.- Con apoyo en lo previsto por el artículo
 "73, último párrafo, de la Ley de Amparo,
 "oficiosamente se examina una causa de
 "improcedencia que conduce a sobreseer por lo
 "que toca al artículo 27, fracción V, de la Ley
 "Ambiental del Distrito Federal.--- Para corroborar
 "la anterior afirmación se tiene presente que el
 "quejoso reclama esa norma legal con motivo de
 "un acto concreto de aplicación que hizo consistir
 "en la resolución de veinticuatro de abril del año
 "pasado, en que el Director General de Prevención
 "y Control de la Contaminación tomó las siguientes
 "decisiones:--- a) Ordenó la suspensión de toda
 "obra relacionada con el proyecto denominado



"Centro Comunitario Maguen David;--- b) Dispuso
 "que la quejosa debía presentar la manifestación de
 "impacto ambiental correspondiente;--- c) Inició
 "procedimiento administrativo de sanción contra la
 "aludida congregación; y, --- d) Ordenó que se
 "publicara el resumen del proyecto en un diario de
 "circulación nacional.--- Por otra parte, el artículo
 "legal reclamado dice así: (se transcribe).--- El
 "demandante afirma que ese acto autoritario es el
 "primer acto concreto de aplicación del precepto
 "transcrito; sin embargo, de la copia certificada de
 "la licencia de construcción que remitió la
 "autoridad sancionadora se advierte que tal
 "licencia está expedida, entre otros, con
 "fundamento en el artículo 27 de la Ley Ambiental
 "del Distrito Federal, y hace la anotación de que en
 "su caso deberá contar con autorización de
 "impacto ambiental (folio 158). Además, si la
 "licencia fue expedida el primero de agosto de mil
 "novecientos noventa y siete, y ampara la
 "construcción de una obra nueva con superficie de
 "más de cuarenta y un mil quinientos metros
 "cuadrados (folio 157 reverso), aparece indubitable
 "que la multicitada licencia de construcción fue el
 "primer acto concreto de aplicación del artículo 27,
 "fracción V, que ahora se reclama.--- Cabe añadir
 "que ese acto de aplicación también acarreo
 "perjuicio a la promovente del amparo, lo que se
 "corroborra si se tiene presente que la autorización



RECIBIDO
 27/8/99
 SALA IV

"del impacto ambiental se requiere para obras de
"más de diez mil metros cuadrados de
"construcción u obras nuevas en predios de más
"de cinco mil metros cuadrados, hipótesis en las
"que se ubicó según los datos que se desprenden
"de la licencia de construcción. Ahora, el hecho de
"que en resolución de veinticuatro de abril de mil
"novecientos noventa y ocho, se haya impuesto a
"la demandante diversas sanciones, con
"fundamento, entre otros, en el multicitado artículo
"27, fracción V, de la Ley Ambiental, no significa
"que sea ese el primer acto concreto de aplicación
"en su perjuicio, pues la autoridad sancionadora
"hizo referencia a tal disposición legal para poner
"de manifiesto que la asociación civil dejó de
"cumplir con la obligación que la disposición
"prevé, obligación que se hizo exigible desde que
"se le expidió la licencia de construcción y por no
"acatarla se le sancionó en los términos antes
"indicados.--- Lo anterior demuestra la inexactitud
"de que la multicitada resolución de veinticuatro de
"abril de mil novecientos noventa y ocho, sea el
"primer acto concreto de aplicación de la
"mencionada disposición legal en perjuicio del
"demandante, sino que se trata de una ulterior.---
"Las explicaciones anteriores conducen a
"determinar que el amparo es inoportuno para
"reclamar la inconstitucionalidad aludida, pues en
"todo caso debió impugnarla dentro de los quince



"días siguientes al en que tuvo conocimiento del
"primer acto de aplicación, lo que ocurrió el
"primero de agosto de mil novecientos noventa y
"siete, fecha en que le fue otorgada la licencia de
"construcción según lo confiesa en los
"antecedentes de la demanda.--- Por ende, se
"actualiza la causa de improcedencia que prevé el
"artículo 73, fracción XII, párrafo primero, de la Ley
"de Amparo.--- Debe entonces decretarse el
"sobreseimiento respecto de la ley con fundamento
"en el artículo 74, fracción III, de la ley de la
"materia.--- Por otra parte antes de examinar el
"fondo del asunto, debe advertirse que la quejosa
"únicamente reclamó la aplicación del Acuerdo que
"establece el listado de obras o actividades que
"requieren autorización de impacto ambiental, las
"modalidades para su evaluación y los formularios
"e instructivos aplicables, publicado en la Gaceta
"Oficial del Distrito Federal el siete de abril de mil
"novecientos noventa y siete, mas no el acuerdo en
"sí mismo.--- Por tanto no serán examen de fondo
"los conceptos de violación relativos a la Ley
"Ambiental del Distrito Federal ni los relativos al
"acuerdo.--- SEXTO.- La quejosa manifiesta que la
"resolución de veinticuatro de abril de mil
"novecientos noventa y ocho, viola la garantía de
"irretroactividad de las normas jurídicas generales,
"porque está obrando sobre el pasado para destruir
"situaciones creadas bajo el imperio y la

"legitimidad de las normas reglamentarias para el
 "uso del suelo y que sirvieron de apoyo a la
 "constancia de zonificación de uso de suelo que
 "expidió el Jefe del Registro del Plan Director para
 "el Desarrollo Urbano del Distrito Federal, lo que
 "resulta contrario a la garantía de irretroactividad
 "que consagra el artículo 14 constitucional, porque
 "le privan y desconocen derechos adquiridos
 "conforme a la normatividad que estuvo vigente en
 "mil novecientos noventa y cinco, mediante la
 "aplicación retroactiva de la normatividad nueva, o
 "sea el artículo 27 de la Ley Ambiental del Distrito
 "Federal, publicada en el Diario Oficial de la
 "Federación el nueve de julio de mil novecientos
 "noventa y seis, que entró en vigor al día siguiente
 "de su publicación, así como el Acuerdo que
 "establece el listado de obras o actividades que
 "requieren autorización de impacto ambiental, las
 "modalidades para su evaluación y los formularios
 "e instructivos aplicables, destruyendo así las
 "situaciones jurídicas concretas nacidas
 "legítimamente bajo el Plan de Desarrollo Urbano
 "para la Delegación de Morelos, Versión 1987, con
 "creación de derechos específicos a su favor.---
 "Alega que como la licencia de uso de suelo data
 "del cinco de diciembre de mil novecientos noventa
 "y cinco y la Ley Ambiental del Distrito Federal
 "entró en vigor el diez de julio de mil novecientos
 "noventa y seis, no necesitaba autorización de



CORTE DE
NACIONES
UNIDAS DE
LA SALA IV

"Impacto ambiental, pues al obtener la licencia de
"uso de suelo adquirió derechos que no se pueden
"desconocer ahora.--- Para estudiar el concepto de
"violación se toma en consideración que la quejosa
"efectivamente cuenta con constancia de
"zonificación de uso del suelo número CZ-081666,
"folio 24255, expedida el veinticuatro de octubre de
"mil novecientos noventa y cinco (folio 49) así
"como con licencia de uso de suelo número
"L.U.S./019/95/05 expedida el cinco de diciembre de
"mil novecientos noventa y cinco, y licencia de
"construcción número 11/055/97/05 expedida el
"primero de agosto de mil novecientos noventa y
"siete.--- Ahora, según lo dispuesto por el artículo
"30.1. del Reglamento de Construcciones para el
"Distrito Federal, la constancia de zonificación de
"uso del suelo, es el documento que expide el
"Departamento, donde se especifican los usos
"permitidos o prohibiciones conforme a los Planes
" (Programas) Parciales de Desarrollo Urbano, para
"el aprovechamiento de un predio, edificación o
"inmueble. Así, el hecho de que se expida una
"constancia de zonificación de uso del suelo,
"previa solicitud del interesado, sólo tiene un mero
"efecto declarativo.--- Es aplicable al caso la tesis
"ejecutoria consultable en el Semanario Judicial de
"la Federación, Octava Época, Tomo XII-Octubre:---
"ZONIFICACIÓN, CONSTANCIA DE. NO
"CONSTITUYE DERECHOS.- (se transcribe).--- La

"tesis transcrita también nos da noticia que la
 "licencia de uso de suelo limita o restringe el uso
 "de los inmuebles en determinadas zonas de
 "acuerdo con los programas de desarrollo.---
 "Asimismo, el Reglamento de Construcciones para
 "el Distrito Federal contempla la licencia de uso de
 "suelo como un requisito previo para que se expida
 "la licencia de construcción.--- Lo anterior se
 "corroborra con la lectura del artículo 53 del
 "reglamento aludido, pues establece que previa a la
 "solicitud del propietario o poseedor para la
 "expedición de la licencia de construcción a que se
 "refiere el artículo 54 del propio reglamento, se
 "deberá obtener la licencia de uso del suelo,
 "cuando se trate de los casos que especifica en los
 "incisos que contempla. De una revisión de éstos,
 "se advierte con claridad que el proyecto de la
 "quejosa entra en varios de ellos.--- Pues bien, el
 "artículo 54 del reglamento en comento establece
 "que la licencia de construcción es el acto que
 "consta en el documento expedido por el
 "Departamento por el que se autoriza a los
 "propietarios o poseedores, según sea el caso,
 "para construir.--- Y, el artículo 56, fracción I, inciso
 "d), prevé que la solicitud de licencia de
 "construcción deberá ser suscrita por el propietario
 "o poseedor, y cuando se requiera deberá contener
 "la responsiva de un director responsable de obra,
 "y en su caso, del o los corresponsables, ser





"presentada en las formas que expida el
"Departamento y acompañar entre otros
"documentos, licencia de uso del suelo, en su
"caso, cuando se trate de obra nueva.--- De lo hasta
"aquí explicado se advierte que la licencia de uso
"de suelo es un mero requisito para obtener la de
"construcción, y ésta es la que autoriza a construir,
"y no la licencia de uso de suelo como estima la
"quejosa.--- En consecuencia, con la licencia de
"uso del suelo no obtuvo derechos adquiridos para
"construir, sino que la autorización para ello la
"obtuvo hasta que le fue expedida la licencia de
"construcción, el primero de agosto de mil
"novecientos noventa y siete (folio 46), fecha en la
"que ya estaba vigente la Ley Ambiental del Distrito
"Federal, que inició a partir del diez de julio de ese
"mismo año, según lo previsto en el primer
"transitorio.--- Por tanto, es infundado el concepto
"de violación.--- Por otra parte, alega que se
"vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17
"constitucionales, en virtud de que de la resolución
"de veinticuatro de abril de mil novecientos
"noventa y ocho, se desprende que previamente a
"que la autoridad sancionadora resolviera
"suspender la obra de construcción existió una
"denuncia formulada por una asociación civil que
"no se le dio a conocer, violando así su garantía de
"audiencia, pues no tuvo oportunidad de combatir
"los argumentos de la referida denuncia ni los

"documentos que en su caso se hubieren
 "anexado.--- Insiste que la resolución que combate
 "le priva su derecho de usar y construir el predio
 "que defiende, así como que fue molestada sin
 "mandamiento escrito de autoridad competente, en
 "razón de que la Dirección General de Prevención y
 "Control de la Contaminación 'no es competente
 "para ejecución y modalidades impuestas por una
 "legislación que es inconstitucional, además de
 "que nunca se fundó y motivó realmente la causa
 "legal del procedimiento que dio por resultado la
 "resolución de fecha 24 de abril de 1998' (folio 24).
 "- Agrega que aunque la autoridad responsable
 "indique una serie de normas, no existe adecuación
 "entre los motivos aducidos y las normas
 "aplicables, por lo que es manifiesta la falta de
 "motivación, puesto que es necesario señalar con
 "precisión las circunstancias especiales que se
 "hayan tomado en consideración, y no basta
 "argumentar a través de considerandos alejados
 "del sentido mismo que prevé la norma
 "fundamental, además la resolución que combate
 "se emitió con base en intereses personales de la
 "asociación denunciante, que la responsable
 "protegió, causando notables daños y perjuicios a
 "su persona.--- Para analizar los argumentos
 "expuestos, primero debe quedar claro que la
 "resolución de veinticuatro de abril de mil
 "novecientos noventa y ocho, es un acto de

EXPEDIENTE C
 SECRETARÍA DE JUSTICIA
 SECRETARÍA DE JUSTICIA
 SECRETARÍA DE JUSTICIA



"molestia, no de privación, y por tanto, la
"responsable no tenía obligación de otorgarle
"garantía de audiencia, además, la propia
"resolución indica que se inicia el procedimiento
"administrativo de sanción (folio 42).---- Al respecto
"resulta aplicable la tesis consultable en el
"Semanario Judicial de la Federación, Séptima
"Época, Tomo 81 Tercera Parte:--- 'AUDIENCIA Y
"SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE ACTOS
"PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES
"O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16
"CONSTITUCIONALES.- (se transcribe).--- Así, si
"blen la quejosa se ve impedida por el momento
"para seguir con la construcción de la obra, ello no
"quiere decir que se le prive de la posesión jurídica
"del predio ni de lo que lleva construido en él, sino
"simplemente que debe cumplir con los requisitos
"que establecen las leyes reglamentarias para
"continuar con la obra.--- Para corroborar que la
"resolución de veinticuatro de abril del año pasado
"emitida por el Director General de Prevención y
"Control de la Contaminación es un acto de
"molestia, basta apreciar qué decisiones tomó:--- a)
"Ordenó la suspensión de toda obra relacionada
"con el proyecto denominado Centro Comunitario
"Maguen David;--- b) Dispuso que la quejosa debía
"presentar la manifestación de impacto ambiental
"correspondiente.--- c) Inició procedimiento
"administrativo de sanción contra la aludida

"congregación; y,--- d) Ordenó que se publicara el
 "resumen del proyecto en un diario de circulación
 "nacional.--- De lo anterior se advierte que ninguna
 "de las determinaciones de la autoridad
 "sancionadora constituyen actos de privación.---
 "Ahora, la quejosa se duele de que la resolución,
 "que evidentemente consta en mandamiento
 "escrito y está fundada y motivada, no está
 "debidamente motivada, sin embargo no explica las
 "razones por las que la motivación es inadecuada,
 "y considerando que el amparo en materia
 "administrativa es de estricto derecho, no puede
 "oficiosamente examinarse la motivación.---
 "Finalmente, el argumento relativo a la
 "competencia descansa en la premisa de que la
 "legislación es inconstitucional en virtud de que
 "impone modalidades; empero, como se sobreseyó
 "respecto de la ley impugnada, el argumento
 "resulta inatendible.--- Por último, la quejosa
 "argumenta que la resolución multicitada vulnera el
 "artículo 25, párrafos primero y último,
 "constitucional, en virtud de que al suspenderse la
 "obra relacionada con el Centro Maguen David se
 "priva de trabajo lícito y honesto, así como de su
 "salario, a obreros, ingenieros, arquitectos, entre
 "otros; además se impide un crecimiento
 "económico que repercutiría en la Nación, lo cual
 "se vería reflejado a través de diversas fuentes de
 "ingresos con la creación de empleos.--- Así,

TE D
CION
RDOS 22
SALA

"estima que tomando en consideración que el
"Estado rector debe impulsar el desarrollo
"nacional, bajo criterios de equidad social y
"productividad a las empresas de los sectores
"sociales y privados con el fin primordial que se dé
"una expansión económica que provea a los
"gobernados de una base sólida y eficiente, un
"ejemplo de ello es la creación de fuentes de
"trabajo.--- Destaca que debe considerarse también
"la situación actual que vive el país, y que en
"atención a ella los gobernantes están obligados a
"procurar un desarrollo integral basado en una
"estructura jurídica sana que conlleve al constante
"mejoramiento económico, social y cultural del
"pueblo, por lo que al suspender la obra que
"defiende, se viola claramente el artículo 25
"constitucional porque con ello se suspenden
"empleos, así como futuras fuentes de trabajo e
"ingresos.--- Concluye que las cuestiones
"ecológicas y de conservación del medio ambiente
"no deben ser usadas por las autoridades
"administrativas como medios para encubrir
"intereses personales, porque tales cuestiones son
"tan importantes como el desarrollo económico
"sano que es de interés público y por tanto las
"autoridades no deben estorbar en el crecimiento
"económico nacional.--- Además de la violación al
"precepto constitucional citado, estima que
"también se vulnera lo estatuido por el artículo 3º,

"fracciones III y IV, de la Constitución, en razón de
 "que la resolución que impugna atenta contra los
 "fines a que ese precepto alude, pues al
 "suspenderse la obra relacionada con el Centro
 "Maguen David, también se suspende su derecho
 "de impartir educación en todos sus tipos y grados,
 "la posibilidad de proveer a un desarrollo armónico
 "de todas las facultades de quienes pudieran ser
 "sus alumnos, la lucha contra la ignorancia,
 "dejando de fomentar entonces un mejoramiento
 "económico, social y cultural, que garantiza la
 "Constitución y son de interés social.--- Los
 "conceptos de violación relativos a la violación de
 "los artículos 3° y 25 constitucionales resultan
 "inoperantes en virtud de que no atacan las
 "consideraciones de las responsables ni los
 "fundamentos que aplicó en la resolución
 "contenida en el oficio E/CO2/DGPCC/5325 de
 "veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y
 "ocho.--- Al haber resultado infundados los
 "conceptos de violación debe negarse el amparo
 "solicitado en contra del oficio E/CO2/DGPCC/5325
 "de veinticuatro de abril de mil novecientos
 "noventa y ocho, y su ejecución."

CUARTO.- Inconforme con la resolución anterior, el
 veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la
 quejosa interpuso recurso de revisión.



Recibido el expediente en este Alto Tribunal, por auto de fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, su Presidente admitió el recurso de revisión, y ordenó dar vista al Ministerio Público Federal para que alegara lo que a su representación social conviniera, sin que al efecto se formulara pedimento alguno.

Por diverso proveído de Presidencia, el veinticuatro de mayo del mismo año, se turnó el expediente al Ministro Juan N. Silva Meza para que estudiara y elaborara del proyecto de resolución respectivo.

Mediante a cuerdo de dos de mayo de dos mil, previa remisión que de los presentes autos realizara el Secretario General de Acuerdos, el Presidente de esta Primera Sala, lo tuvo por radicado, de conformidad con el punto Primero, inciso a) del Acuerdo Plenario 4/2000, y ordenó devolver los autos al Ministro Juan N. Silva Meza.

CONSIDERANDO:

PRIMERO Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción VII del Acuerdo 1/1997 del Tribunal Pleno de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en relación con el

punto primero, inciso a) del Acuerdo Plenario 4/2000, de nueve de marzo de dos mil; ya que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se alegó la inconstitucionalidad del artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental del Distrito Federal, y en el recurso subsiste dicho problema de constitucionalidad.

SEGUNDO.- La sentencia recurrida, fue notificada por lista a la quejosa el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve (foja 333 vuelta del cuaderno de amparo), en tanto que el escrito por el que se interpone el recurso de revisión (fojas de la 2 del Toca), fue presentado el día veintitrés siguiente, por lo que, eliminando los días trece, catorce, veinte y veintiuno, por ser inhábiles; se advierte que dicho ocurso fue presentado dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.

TERCERO.- Los agravios esgrimidos por la quejosa recurrente son del tenor siguiente:

"AGRAVIOS. --- PRIMERO.- Violación de los
"artículos 73, fracción V, 74 fracción III, 77 y 114
"fracción I, de la Ley de Amparo en relación con los
"diversos 222 y 352 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria:---
"El artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo
"señala que el Amparo se pedirá ante el Juez de
"Distrito:--- (se transcribe).--- Del considerando
"Quinto que a continuación se transcribe se



"desprenden las violaciones que comete el C. Juez
"al considerar de forma equívoca que el acto
"reclamado consistente en el oficio
"E/CO2/DGPCC/5325 de fecha 24 de abril de 1998
"que contiene la resolución que ordena la
"suspensión de toda obra de construcción del
"Centro Maguen David, A.C., y el inicio de un
"procedimiento de sanción, no son el primer acto
"de aplicación. --- (se transcribe).--- En relación
"con lo así resuelto por el Juez cabe hacer notar
"dos situaciones: --- 1.- De la Licencia de
"construcción expedida a favor de la quejosa no
"puede inferirse de manera alguna que exista
"obligación para contar con la autorización de
"impacto ambiental, y que por consiguiente desde
"que ese momento se haya dado el primer acto de
"aplicación del artículo 27, fracción V, de la Ley
"Ambiental, por las siguientes razones. --- a) Si bien
"es cierto que en el reverso de la 'licencia de
"construcción' expedida a la quejosa se señala la
"leyenda 'autorización de impacto ambiental', es
"eso simplemente una leyenda, no se trata de una
"obligación a cargo de la quejosa que haya nacido
"desde el momento en que se le otorgó aquélla,
"puesto que no se señala de forma específica el
"fundamento jurídico en el que se base tal
"autorización, sólo se observa una mención vaga,
"genérica e imprecisa que no constituye por sí
"mismo un acto de aplicación respecto del quejoso,

"como erróneamente lo indica el C. Juez en la
 "sentencia combatida --- b) En el momento en que
 "fue expedida la licencia de construcción no nació
 "la obligación consistente en tener 'autorización de
 "impacto ambiental', puesto que de dicho
 "documento no se perciben ni siquiera los
 "requisitos mínimos y necesarios para que la hoy
 "quejosa hubiera estado en aptitud de tramitar tal
 "autorización o en el caso que nos ocupa solicitar
 "desde ese momento la protección de la Justicia
 "Federal por considerar inconstitucional la
 "aplicación del precepto correspondiente, así como
 "el precepto mismo, pues en ese momento no se le
 "afectaron sus intereses jurídicos.--- c) No existió
 "desde el momento en que se otorgó 'la licencia de
 "construcción' obligación respecto de la
 "autorización de impacto ambiental, puesto que ni
 "siquiera se determinó precepto jurídico alguno en
 "que se apoyara dicha autorización, y que
 "permitiera al quejoso saber qué ordenamiento se
 "le estaba aplicando, así como cada una de las
 "consecuencias generadas por tal aplicación.--- d)
 "Para que pueda considerarse que determinado
 "acto administrativo, como lo es en este caso el
 "otorgamiento de la licencia de construcción
 "obtenida por el quejoso genera por su sola
 "emisión obligaciones al gobernado, debe
 "atenderse a la naturaleza misma del acto, y
 "observar si en efecto se imponen obligaciones

ESTADO DE GUATEMALA
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
 SECRETARÍA DE ACU
 D. FLORES



"claras, precisas y determinadas que permitan al
"gobernado cumplirlas cabalmente o
"inconformarse según sea el caso a través de los
"medios legales correspondientes.--- e) En el caso
"en particular, no puede considerarse como primer
"acto de aplicación el que se mencione simple y
"llanamente en la licencia de construcción, la
"condición de autorización de impacto ambiental,
"puesto que ésta nunca fue señalada de forma
"clara, precisa y contundente, que no dejara lugar a
"duda al hoy quejoso y que constituyera por sí
"misma el nacimiento y la exigibilidad de la
"obligación de contar con la autorización referida.--
"- Máxime aún que se le otorgó a mi autorizante la
"licencia de construcción sin obstáculo alguno que
"impidiese que se construyera el Centro Maguen
"David, lo que da como resultado que se dio ésta
"sin necesidad de contar con la autorización de
"impacto ambiental, porque es claro que no existía
"obligación para el quejoso, nunca le fue aplicado
"el artículo 27, fracción V, de forma precisa clara y
"contundente, razón por la cual es obvio en
"términos generales que ningún gobernado está
"obligado a adivinar que ley o precepto jurídico se
"le está aplicando por el gobernante, porque de lo
"contrario nos estaríamos sustituyendo en las
"funciones de éste, quien constitucionalmente sí
"está obligado a fundar sus determinaciones, para
"que aquél o sea el gobernado, esté en aptitud de

"poder cumplir.--- 2.- Ahora bien, suponiendo sin
 "conceder que la obligación de contar con la
 "autorización de impacto ambiental hubiese nacido
 "desde el momento en que se expidió la licencia de
 "construcción en comento, es claro que en ese
 "momento no se causaba un agravio personal y
 "directo que permitiese al quejoso promover un
 "amparo procedente, puesto que no se daba el
 "elemento básico que debe existir para que el juicio
 "correspondiente se iniciara bajo los lineamientos
 "que la Constitución y la Ley de amparo señalan.---
 "La aplicación de la fracción V, del artículo 27, de la
 "Ley Ambiental del Distrito Federal, se dio por
 "primera vez con la expedición de la resolución de
 "fecha 24 de abril del año en curso, emitida por la
 "Dirección General de Prevención y Control de la
 "Contaminación, y no como lo afirma erróneamente
 "el C. Juez, puesto que es hasta ese momento en el
 "que se da un AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO a
 "la hoy quejosa.--- Una de las bases fundamentales
 "que rigen el Juicio de Amparo, es que sólo podrá
 "promoverse dicho juicio por aquél a quien le
 "perjudique una ley o acto de autoridad, debiendo
 "ser titular de la garantía individual que se estime
 "violada y que exista un menoscabo en los
 "derechos subjetivos públicos del mismo, y cuya
 "afectación debe recaer forzosamente en el que se
 "considere afectado.--- El daño o perjuicio que se
 "infiere al gobernado, en este caso al Centro





RECEIVED
NACIONAL
JULIO 1999
C. B. A. 1

"Maguen David, se da por parte de la autoridad
"responsable señalada en los párrafos
"precedentes, en relación con la aplicación de un
"precepto que es considerado inconstitucional y
"que infringe al ser aplicado, diversas garantías
"constitucionales de las cuales es titular mi
"autorizante, mismas que fueron violadas por la
"responsable, y que fueron objeto de otros
"conceptos de violación hechos valer en su
"momento procesal oportuno por la quejosa.--- No
"es cierto que el primer acto de aplicación del
"artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental, se
"haya dado desde el momento en que se expidió la
"licencia de construcción, como se ha afirmado en
"el numeral anterior, por la siguiente razón:--- Es
"claro que respecto del primer acto de aplicación el
"quejoso en términos generales está obligado a
"demostrar que le perjudica dicho acto, puesto que
"de lo contrario se sobreseerá el juicio de amparo
"correspondiente, por improcedente como lo ha
"sostenido en innumerables ejecutorias nuestro
"máximo tribunal, y que con posterioridad se
"transcribirán.--- Ahora bien, conforme a la técnica
"del juicio de amparo se debe analizar el aspecto
"sustantivo de la norma con motivo del primer acto
"de aplicación de la siguiente manera:--- a) Que
"irrumpe en la individualidad de un gobernado.--- b)
"Que le ocasione un agravio en su esfera jurídica.---
"c) Que se le aplique formal o materialmente, de

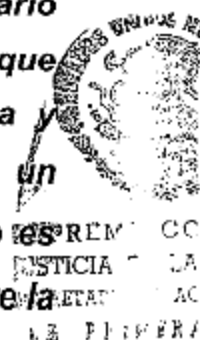
"manera escrita o de hecho.--- d) Que altere el
 "ámbito jurídico de la persona para que se estime
 "aplicada.--- En este orden de ideas es claro que la
 "aplicación directa y formal del artículo 27, fracción
 "V, de la Ley Ambiental del Distrito Federal se dio
 "hasta que se emitió la resolución del 24 de abril de
 "1998, y que en ese momento se generó un daño al
 "quejoso, se propició un agravio directo en su
 "esfera jurídica, alterando el ámbito jurídico de
 "éste, irrumpiendo además en diversas violaciones
 "de carácter constitucional.--- El C. Juez omitió
 "estudiar realmente el texto de la licencia de
 "construcción otorgada a la quejosa al decir en la
 "sentencia recurrida, que desde que se expidió
 "aquella se hacía mención al artículo 27, fracción V
 "de la Ley Ambiental, esto demuestra la ligereza
 "con la que se condujo al dictar la resolución que
 "se combate, puesto que nunca se hace alusión a
 "tal disposición y mucho menos que por ser una
 "obra nueva en un predio de más de cinco mil
 "metros cuadrados se haya ubicado en la hipótesis
 "legal correspondiente, que obligara a mi
 "autorizante a contar con la autorización de
 "impacto ambiental, lo único que se desprende de
 "la licencia es lo siguiente:--- 'Expedición de
 "licencia de construcción para obra nueva:---...---
 "..... Autorización de impacto ambiental'.---
 "Sólo se señala 'autorización de impacto ambiental'
 "y no la disposición legal u ordenamiento de donde





"se desprenda tal obligación como ya se ha
"mencionado, y que pueda dar cabida a que el hoy
"quejoso pudiera saber cuáles requisitos son los
"que debe tener dicha autorización, máxime aún
"que no se irrogaba en ese momento daño o
"agravio directo al mismo quejoso, porque de lo
"contrario se permitiría el ejercicio de una acción
"sin bases, apoyada en expectativas y no en
"situaciones actualizadas y concretas porque
"siempre debe haber la causación previa del
"perjuicio y no la mera posibilidad futura e incierta
"de que ello pueda surgir con posterioridad.--- A
"mayor abundamiento, el hecho de que se otorgara
"la licencia de construcción para dar cumplimiento
"al objeto para la cual fue expedida, da la pauta
"para considerar que el Quejoso no sufría agravio
"alguno en ese momento, ni siquiera al ser
"otorgada ésta se condicionó a presentar la
"autorización de impacto ambiental para que
"pudiese empezar a construir el Centro Maguen
"David, si no que el acto de aplicación del artículo
"27, fracción V, de la Ley Ambiental se actualizó en
"el momento en que se generó el perjuicio a mi
"autorizante, resolviendo de forma inconstitucional
"e ilegal, ordenar suspender toda obra relacionada
"con el proyecto aludido, como lo indica
"claramente el acto reclamado.--- Es en sí el oficio
"número E/CO2/DGPCC/5325 emitido el 24 de abril
"de 1998 el primer acto concreto de aplicación, que

"determina la procedencia del amparo y del cual no
 "sólo se demostró la existencia del acto reclamado,
 "sino que también el perjuicio que por la aplicación
 "de éste, se le dio el quejoso y es a partir de este
 "momento en que se dan las condiciones técnicas
 "jurídicas para promover el juicio de garantías
 "correspondiente.--- Nuestro más Alto Tribunal ha
 "señalado que las resoluciones en que se decretan
 "las clausuras de una obra en construcción y en
 "los que se finca responsabilidad a su propietario
 "se consideran el primer acto de aplicación, porque
 "no basta que se obligue de forma imprecisa y
 "vaga, sino que es menester que se cause un
 "perjuicio inmediato y directo al quejoso como es
 "el que se da con un acto de autoridad que afecte la
 "esfera jurídica del gobernado, y no las meras
 "visitas u opiniones de inspectores o porque así lo
 "señaló la licencia misma, sino que es necesario
 "que ese acto de autoridad transgreda los derechos
 "protegidos por la Constitución respecto de la
 "parte agraviada.--- A continuación se transcriben
 "las siguientes tesis jurisprudenciales:---
 "CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL.
 "ES ACTO DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 70
 "Y 335, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO
 "RESPECTIVO, LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA
 "LA CLAUSURA DE UNA OBRA Y FINCA
 "RESPONSABILIDAD A SU PROPIETARIO.- (se
 "transcribe).--- 'CLAUSURA. AFECTA EL INTERÉS





"JURÍDICO DEL PARTICULAR, LEGITIMÁNDOLO
"PARA COMBATIR EN AMPARO LOS PRECEPTOS
"CON BASE EN LOS CUALES ÉSTA SE DECRETÓ.
"AUNQUE NO ACREDITE CONTAR CON LA
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESPECTIVA.-
"(se transcribe). '--- 'AMPARO CONTRA LEYES CON
"MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI
"ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE
"SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO
"IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA CUANDO
"EN REALIDAD SE APLIQUE EN SU PERJUICIO.-
"(se transcribe). '--- 'AMPARO CONTRA LEYES CON
"MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA
"DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN
"FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO
"DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA
"FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE
"AMPARO, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE
"TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE
"LA LEY (se transcribe). '--- 'LEYES
"HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN
"PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES
"IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
"73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114,
"FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE
"LA LEY DE AMPARO.- (se transcribe). ' ---
"AMPARO CONTRA REGLAMENTOS. ES
"PROCEDENTE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DE
"UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DICTADA

"DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN
 "FORMA DE JUICIO Y ÉSTA CONSTITUYE UN
 "PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.- (se transcribe).'-
 "- 'LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE
 "DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO
 "DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO.- (se
 "transcribe).'- 'LEYES HETEROAPLICATIVAS.
 "PARA QUE SEA PROCEDENTE SU
 "IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA
 "LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU
 "INTERÉS JURÍDICO.- (se transcribe).'- 'LEYES
 "HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA.
 "PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE
 "APLICACIÓN.- (se transcribe).'- 'LEYES
 "HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA.
 "PROCEDE CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE
 "APLICACIÓN.- (se transcribe).'- 'LEYES. PARA
 "LA PROCEDENCIA DEL AMPARO NO DEBE
 "ATENDERSE A LA NATURALEZA DEL PRIMER
 "ACTO DE APLICACIÓN.- (se transcribe).'-
 "'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TRATÁNDOSE DE
 "ACTUACIONES QUE REQUIERAN EJECUCIÓN
 "PARA QUE EL AGRAVIO SE ACTUALICE, EL
 "TÉRMINO PARA QUE PROMUEVA AMPARO
 "DEBERÁ EMPEZARSE A COMPUTAR A PARTIR
 "DE QUE PRETENDAN EJECUTARSE EN SU
 "PERJUICIO.- (se transcribe).'- Por todo lo
 "anterior y en específico por lo señalado en las
 "tesis jurisprudenciales invocadas, se ve



"claramente que el C. Juez al dictar la sentencia
"hoy combatida se olvida de las cuestiones
"argumentadas en este primer agravio que son a
"saber:--- 1.- De la licencia de construcción
"otorgada al quejoso no se desprende obligación
"alguna, pues en el texto mismo no aparece
"precepto jurídico alguno con relación a la
"autorización de impacto ambiental, asimismo no
"existe obligación que cumpla con las
"características de claridad, individualidad y
"precisión que vinculen el gobernado con las
"exigencias del gobernante.--- 2.- No se generó
"daño y perjuicio alguno al quejoso por la
"expedición de la licencia que hiciera necesario por
"el solo otorgamiento de esta la procedencia del
"amparo.--- Ese daño y perjuicio se dieron en el
"momento en que se le notificó la resolución del 24
"de abril de 1998 que ordenaba la suspensión o
"clausura de la obra, constituyendo éste, por sí
"mismo, el primer acto de aplicación de las normas
"consideradas inconstitucionales.--- Resulta
"evidente que se aplicaron causales de
"sobreseimiento que no operan en el caso que nos
"ocupa y que por lo tanto la quejosa promovió
"oportunamente el amparo contra la Ley Ambiental
"del Distrito Federal, en específico lo relativo al
"artículo 27, fracción V, así como lo relativo a la
"resolución de fecha 24 de abril emitida por la
"Dirección General de Protección y Control a la

"Contaminación, por ser éste el primer acto de
 "aplicación que originó el perjuicio, por lo tanto
 "solicito a esa H. Suprema Corte de Justicia de la
 "Nación revoque el sobreseimiento y entre al
 "estudio de los conceptos de violación expuestos
 "en la demanda y conceda a la quejosa el Amparo y
 "Protección Constitucional que impetra.--- A
 "continuación se transcriben las siguientes tesis
 "jurisprudenciales:-- 'SOBRESEIMIENTO DE LA
 "DEMANDA DE GARANTÍAS, DEBE DECRETARSE
 "SIEMPRE QUE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA
 "SEA NOTORIA Y MANIFIESTA.- (se transcribe).---
 "'ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU
 "ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE
 "SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR. A
 "PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE
 "HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA
 "REVISIÓN.- (se transcribe).--- 'REVISIÓN,
 "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL EN PLENO PARA
 "CONOCER DEL RECURSO DE.- (se transcribe).---
 "SEGUNDO.- VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 74
 "FRACCIÓN IV, 76, 77, 151 Y 155 DE LA LEY DE
 "AMPARO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 222 DEL
 "CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
 "CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA.--- En el
 "considerando tercero de la sentencia que se
 "combate señala:--- (Se transcribe).--- El C. Juez
 "considera al aplicar esa causal de sobreseimiento
 "que no existe acto reclamado de la autoridad





"responsable mencionada y que además en
"audiencia no se probó la existencia de este acto,
"situación que vulnera en perjuicio de la quejosa
"los preceptos legales invocados, puesto que en la
"especie, no se surte la fracción IV del artículo 74
"de la Ley de Amparo, ya que del oficio citado de
"fecha 24 de abril de 1998 se desprende de la parte
"superior derecha de éste, que la dependencia que
"emite el acto reclamado es la Secretaría del Medio
"Ambiente, a través de la Sección Dirección
"General de Prevención y Control a la
"Contaminación, situación que por obviedad de
"razones hace prueba plena y permite observar que
"el acto atribuido a dicha autoridad es cierto.---
"Ahora bien, independientemente de lo anterior, de
"autos se desprende que el informe rendido por la
"autoridad en comento no tiene validez alguna para
"el juicio que nos ocupa, pues se refiere a un
"escrito de ampliación de demanda que nunca se
"efectuó en el amparo número 286/98, lo que nos
"conduce a concluir que en efecto dicha autoridad
"no rindió informe alguno para el caso que nos
"ocupa.--- El C. Juez no debió haber atendido dicho
"informe puesto que carece de relación alguna con
"el juicio en cuestión, careciendo a su vez de
"fundamento jurídico alguno, y por lo tanto se
"deben considerar como ciertos los actos que de
"dicha autoridad se reclamaron.--- Por lo indicado
"es claro que no se actualiza la causal de

"sobreseimiento aplicada por el C. Juez en
 "perjuicio de la quejosa, y en este acto se solicita a
 "esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación,
 "revoque el sobreseimiento indicado dictando
 "ejecutoria al respecto y estudie los conceptos de
 "violación expuestos por la quejosa.--- TERCERO.-
 "VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 76, 77 Y 114
 "FRACCIÓN I DE LA LEY DE AMPARO EN
 "RELACIÓN CON EL 222 DEL CÓDIGO FEDERAL
 "DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN
 "SUPLETORIA.--- En la parte final del considerando
 "quinto de la sentencia combatida, se sostiene lo
 "siguiente:--- (se transcribe).--- De lo anterior se
 "desprende claramente que el C. Juez no analizó la
 "demanda de amparo como un todo, olvidándose a
 "su vez del principio constitucional respecto de la
 "jerarquía que tienen las normas dentro del orden
 "jurídico.--- En el escrito inicial de demanda se
 "reclamó en primer lugar la Ley Ambiental del
 "Distrito Federal en cuanto a su artículo 27,
 "fracción V, así como todas las consecuencias y
 "efecto de dicho precepto.--- Del precepto que se
 "considera inconstitucional se desprende la norma
 "general abstracta e impersonal que indica.---
 "'Dentro del Suelo urbano no se requerirá
 "autorización de impacto ambiental salvo
 "tratándose de las siguientes obras y actividades...
 "fracción V.- Obras de más de 10,000 M2. de
 "construcción u obras nuevas en predios de más





"de 5,000 M2. Para uso distinto al habitacional".---
"Es obvio que el quejoso al no estar de acuerdo
"con la disposición antes transcrita tampoco está
"respecto de cualquier otra de jerarquía inferior que
"pretenda una vez actualizada la hipótesis
"imponerle obligaciones encaminadas a obtener la
"autorización de impacto ambiental.--- El
"considerar el quejoso que es inconstitucional el
"artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental, es
"claro que también considera inconstitucional el
"artículo 10 del acuerdo que establece el listado de
"obras o actividades que requieren autorización de
"impacto ambiental, las modalidades para su
"evaluación y los formularios e instructivos
"aplicables, tan es así que de la foja 14 de la
"demanda de garantías se señaló de forma precisa
"que tal acuerdo adolece de los mismos vicios de
"inconstitucionalidad que la Ley reclamada a través
"de su primer acto de aplicación.--- Por lo tanto una
"vez más se demuestra la ligereza con la que se
"condujo el C. Juez ya que no interpretó
"adecuadamente la demanda hecha valer,
"reduciéndose a afirmar infundadamente que no se
"había atacado de inconstitucional el acuerdo
"mismo si no que únicamente la aplicación de éste
"por las autoridades ahí señaladas.--- Del acuerdo
"mencionado se reclama la inconstitucionalidad de
"éste así como la aplicación del mismo.---
"CUARTO.- Violación de los artículos 222 y 352 del

"Código Federal de Procedimientos Civiles
 "supletoriamente aplicado, debido a que el C. Juez
 "de Distrito hizo un deficiente análisis de las
 "cuestiones planteadas y una incorrecta resolución
 "de los puntos sometidos a su consideración; y
 "además violación de los artículos 73, fracciones
 "XV y XVIII, en relación con 74, fracción III, 76, 77,
 "78 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, en
 "cuanto que los aplica e interpreta erróneamente en
 "la sentencia combatida.--- Expresa el C. Juez de
 "Distrito en el considerando sexto de la resolución
 "combatida, que:--- (se transcribe) --- Resulta
 "inaplicable la tesis ejecutoria consultable en el
 "Semanario Judicial de la Federación, Octava
 "Época, bajo el rubro 'ZONIFICACIÓN,
 "CONSTANCIA DE. NO CONSTITUYEN
 "DERECHOS', que el juez A quo invoca, toda vez
 "que hace una mala aplicación e interpretación ya
 "que más allá de probar que la licencia de uso de
 "suelo no se refiere a derechos adquiridos, le da un
 "tratamiento como un requisito esencial para
 "obtener la licencia de construcción y basta una
 "simple lectura de la tesis de referencia para
 "confirmar que la licencia de uso de suelo es la que
 "limita o restringe el uso de los inmuebles en
 "determinadas zonas de acuerdo con los
 "Programas de Desarrollo del Departamento del
 "Distrito Federal, por lo que es claro que estamos
 "en presencia de un derecho adquirido bajo el





"amparo de leyes anteriores.--- Debe considerarse
"que el permitir usar un bien para determinado fin
"constituye un derecho en sí mismo, es pues una
"facultad derivada de la licencia de uso otorgada.
"De modo que si el Juez la consideró como un
"nuevo requisito para obtener la licencia de
"construcción se equivoca, pues no es un mero
"requisito sino un acto administrativo que genera
"derechos.--- En cada etapa se van originando
"derechos para el gobernado, mismos que nacen al
"otorgarse la Licencia de Uso de Suelo y que
"concluyeron con la Licencia de Construcción,
"documentos que obran en el expediente principal,
"por lo que con la aplicación por primera vez de la
"Ley Ambiental, por parte de las autoridades
"responsables, se pretende desconocer, invalidar y
"modificar situaciones jurídicas creadas y surgidas
"bajo el imperio de normas que estuvieron en vigor
"cuando la hoy quejosa solicitó y obtuvo la licencia
"de uso de Suelo de fecha 5 de diciembre de 1995 y
"como consecuencia inmediata la licencia de
"construcción.-- Cuando cualquier sujeto o
"gobernado pretende construir o utilizar un bien
"necesita, según las normas aplicables, solicitar
"autorización de la autoridad competente para
"llevar a cabo el fin pretendido, sin embargo para
"que esto suceda se tiene que someter a etapas
"diversas que le otorgan derechos para poder
"actuar dentro del ámbito del derecho.--- En el caso

"en particular la licencia de uso es una etapa
 "dentro de procedimiento que se sigue para poder
 "obtener una licencia de construcción, pero esta
 "etapa debe considerarse como indispensable y
 "necesaria, ya que sin ésta no podría pasarse a la
 "siguiente. --- En este orden de ideas la licencia de
 "uso de suelo otorga el derecho al que la obtiene a
 "su favor de poder usar el bien del cual es
 "poseedor para el fin solicitado que es
 "precisamente la construcción del Centro
 "Comunitario Maguen David, por lo tanto el C. Juez
 "al señalar que se trata de un mero requisito
 "comete la violación en perjuicio de la quejosa de
 "privarla del derecho subjetivo que tiene en su
 "poder desde el momento en que se otorgó dicha
 "licencia.--- De la misma tesis jurisprudencial
 "invocada por el C. Juez, se desprende la finalidad
 "misma que persigue el otorgamiento de la licencia
 "de uso de suelo, consistente en usar o no
 "determinado bien para tal fin, lo que da como
 "resultado el otorgamiento o no según el caso de
 "un derecho para el gobernado.--- Ahora bien, para
 "desestimar el segundo concepto de violación de la
 "demanda, el Juez a quo se limita a manifestar que
 "el Reglamento de Construcciones del Distrito
 "Federal, en sus artículos 53, 54 y 56 se advierte
 "que la licencia de uso de suelo es un mero
 "requisito. Sin embargo, el propio Juez omite
 "analizar que el artículo 51 del Reglamento que



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
 SECRETARÍA DE JUSTICIA
 19 DE FEBRERO DE 1999



"invoca, señala que la licencia de uso de suelo será
"necesaria en los casos a que se refiere la Ley de
"Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su
"Reglamento.--- Así las cosas, el Juez a quo no
"tuvo el cuidado de dar lectura al Artículo 71 de la
"Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal que
"es una Ley de orden público e interés social, que a
"la letra reza:--- 'Art. 71.- (se transcribe).--- Basta la
"simple lectura del citado artículo para percatarse
"que la licencia de uso de suelo no es un mero
"requisito como lo señala el Juez A quo, sino que
"son derechos adquiridos, que así los reconoce la
"Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por
"lo que la supremacía jerárquica de la ley sobre el
"reglamento prohíbe que éste contradiga aquélla,
"so pena de invalidez. Por lo que resulta que el
"Juez A quo interpreta de manera errónea tales
"disposiciones legales.--- Bajo este orden de ideas
"se concluye que la Ley Ambiental del Distrito
"Federal, misma que entró en vigor el 10 de julio de
"1996, es posterior a la expedición de la licencia de
"uso de suelo, por lo que no era necesario el
"estudio de impacto ambiental, y mucho menos
"para poder solicitar la licencia de construcción,
"tan es así que ésta fue otorgada, porque la
"quejosa cumplió cabalmente con todos y cada uno
"de los requisitos que la legislación
"correspondiente le imponía, por eso es absurdo
"que las autoridades responsables, al emitir la

"resolución de fecha 24 de abril de 1998, apliquen
 "retroactivamente y en perjuicio de la quejosa la
 "Ley en comento, al desconocer la licencia de uso
 "de suelo, ya que se está obrando sobre el pasado
 "para destruir situaciones creadas bajo el imperio y
 "la legitimidad de las normas reglamentarias
 "mencionadas.-- En este sentido, son aplicables
 "las siguientes tesis:--- 'RETROACTIVIDAD DE LAS
 "NORMAS PROCESALES.- (se transcribe).'-
 "'RETROACTIVIDAD. LEY Y ACTO DE
 "APLICACIÓN.- (se transcribe).'- 'DERECHOS
 "ADQUIRIDOS.' (Se transcribe).--- 'DERECHOS
 "ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO
 "CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE
 "RETROACTIVIDAD DE LEYES.- (se transcribe).'
 "La licencia de uso de suelo fue concedida
 "respecto del predio ubicado en [REDACTED]
 [REDACTED] número [REDACTED] Colonia [REDACTED]
 [REDACTED] con relación al proyecto presentado ante
 "la Delegación de Cuajimalpa de Morelos, el cual
 "consistía desde el año de 1995 en un Centro
 "Comunitario que incluía escuelas, sinagoga, áreas
 "verdes, estacionamiento entre otros conceptos, y
 "que es el mismo que ahora pretende clausurar la
 "autoridad responsable destruyendo los derechos
 "que ya con anterioridad y debidamente había
 "adquirido el quejoso, sin que se le impusiera por
 "razón de su tamaño y ubicación, condición alguna
 "como lo es la autorización de impacto ambiental.--



"- El derecho para poder usar el predio objeto del
"comodato para el fin solicitado es la licencia de
"uso de suelo, por lo tanto el acto reclamado se
"aplica retroactivamente en perjuicio del quejoso y
"no como lo aduce erróneamente el señor Juez.---
"QUINTO.- Violación a los artículos 77, fracc. I de la
"Ley de Amparo, 222 y 352 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.---
"El numeral 77 en su fracción I de la Ley de
"Amparo, dispone que las sentencias dictadas en
"los juicios de garantías deberán contener, entre
"otros requisitos, la apreciación de las pruebas
"aportadas al juicio, que sean conducentes para
"tener o no por demostrados los actos reclamados.
"Los actos reclamados en el escrito de demanda se
"hicieron consistir esencialmente en la emisión del
"oficio número E/CO2/DGPCC/5325 de fecha 24 de
"abril de 1998, por la Dirección General de
"Prevención y Control de la Contaminación,
"consistente en la resolución que ordena la
"suspensión de toda obra relacionada con el
"proyecto denominado Centro Maguen David, por
"lo que la quejosa demostró con todas las pruebas
"que presentó, tanto documentales, inspección
"ocular, instrumental de actuaciones y presunción
"legal y humana, que cuenta con todos y cada una
"de las licencias y permisos que establecen las
"leyes de la materia.-- De lo anterior se desprende
"fehacientemente que en el caso de estudio no se

"valoraron las pruebas en su conjunto, además de
 "que omitió examinar debidamente cada una de
 "ellas, sin señalar los motivos o causas que tuvo
 "para llegar a desestimar dichas probanzas.--- En
 "efecto, de la sentencia que hoy se combate se
 "desprende que el señor Juez realizó una
 "apreciación individualizada e inexacta de las
 "pruebas ofrecidas por la quejosa, es decir, si
 "hubiese valorado que tanto la constancia de
 "zonificación, licencia de uso de suelo y licencia de
 "construcción forman parte un todo, las
 "conclusiones obtenidas al respecto serían otras.---
 "Si el Señor Juez hubiera tomado en cuenta que al
 "expedirse la licencia de uso de suelo se habían
 "otorgado derechos a la quejosa, consistentes en
 "la construcción y culminación del proyecto del
 "Centro Maguen David, habría dado una correcta
 "valoración a dicha probanza.--- De la inspección
 "ocular que se realizó en el predio objeto del
 "comodato se desprende claramente que la
 "quejosa contaba con todos los requisitos legales
 "con los cuales se procedió a la construcción del
 "Centro Maguen David, por lo tanto el C. Juez
 "omitó hacer una valoración respecto de esta
 "probanza.--- Todas las mutilaciones y omisiones
 "apuntadas, y la falta de valoración de las pruebas
 "presentadas por la quejosa para tener por
 "demostrados la totalidad de los actos reclamados,
 "además de entrañar una violación ostensible a las



SECRETARÍA DE
 JUSTICIA D. L.
 SECRETARÍA D. A.
 DE PRIMERA



"dos primeras fracciones del artículo 77 de la Ley
"de Amparo, condujeron al señor Juez de Distrito a
"una apreciación equivocada de los actos precisos
"y concretos que la quejosa reclama; de tal manera
"que el Señor Juez, partiendo de una premisa falsa,
"lógicamente llegó a una conclusión también falsa.-
"-- Al efecto sirven de apoyo las siguientes tesis:---
"PRUEBAS, FALTA DE VALORACIÓN DE LAS, ES
"VIOLATORIO DE GARANTÍAS.- (se transcribe).---
"PRUEBAS. VALORACIÓN EN EL JUICIO DE
"AMPARO.' (Se transcribe).--- 'PRUEBAS EN EL
"AMPARO. NO EXISTE LIMITANTE PARA ADMITIR
"ÚNICAMENTE LAS QUE TENGAN RELACIÓN
"INMEDIATA CON LA LITIS CONSTITUCIONAL.- (se
"transcribe).--- 'PRUEBA DE INSPECCIÓN
"JUDICIAL EN EL AMPARO, VALORACIÓN DE LA.
"HECHOS POSITIVOS Y NEGATIVOS.' (Se
"transcribe).--- GARANTÍA DE AUDIENCIA. SE
"INTEGRA NO SOLO CON LA ADMISIÓN DE
"PRUEBA, SINO TAMBIÉN CON SU ESTUDIO Y
"VALORACIÓN.' (Se transcribe).--- SEXTO.-
"VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 76, 77 Y 80 DE
"LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL 222
"Y 352 DEL CÓDIGO FEDERAL DE
"PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN
"SUPLETORIA.--- En el considerando sexto de la
"sentencia recurrida, sostiene el Juez de forma
"indebida que la resolución del 24 de abril de 1998
"es un 'acto de molestia' y no de 'privación', y que

"por lo tanto la responsable no tenía obligación de
 "otorgarle garantía de audiencia, además de que de
 "la propia resolución se iniciaba el procedimiento
 "de sanción.--- Lo cual es inexacto, porque se
 "olvida que la garantía de 'audiencia' corresponde
 "a todo gobernado susceptible de ser parcial o
 "totalmente, sujeto de actos de autoridad.--- El
 "oficio E/CO2/DGPCC/5325 de 24 de abril de 1998
 "es un acto de autoridad que vulnera en forma
 "abierta la garantía de audiencia, por las siguientes
 "razones:--- 1.- Se inició un procedimiento
 "administrativo a través de una denuncia hecha por
 "los terceros perjudicados que solicitaba la
 "suspensión de la obra de construcción del Centro
 "Maguen David, misma que fue ratificada por el
 "denunciante.--- 2.- Con dicha denuncia se
 "procedió a llevar a cabo la visita de verificación
 "extraordinaria respecto del predio objeto de la
 "construcción, sin que se le manifestara al quejoso
 "que dicha visita tenía su origen en la denuncia
 "antes señalada.--- 3.- Se observó que se estaban
 "llevando a cabo obras de limpieza y cortes de
 "terreno sin contar con la autorización de impacto
 "ambiental, dicha diligencia fue atendida por el
 "Director responsable de obra.--- 4.- Posteriormente
 "se emitió el oficio que contiene el acto reclamado,
 "ordenando suspender la obra porque no se
 "contaba con dicha autorización de impacto
 "ambiental.--- De lo anterior se desprende que

SEPREMA
 JUSTICIA DE
 LA PAZ
 LA PAZ



CORTE DE
LA NACION
JUECES DE
1.ª SALA

"nunca se le corrió traslado con la denuncia hecha
"por los terceros perjudicados a la hoy quejosa, así
"como respecto de los documentos que aquéllos
"acompañaron con la tal denuncia, por lo tanto
"nunca estuvo en aptitud mi autorizante de ser
"vencido y oído antes de que se dieron los actos no
"sólo de molestia sino también de privación.--- Se
"le privó de los derechos subjetivos que nacieron
"de la licencia de uso y de construcción otorgados,
"de las cuales se desprende que el quejoso podía
"usar y construir en el predio objeto del comodato
"el Centro Maguen David, por lo tanto no sólo se
"trata de un acto de molestia sino también de
"privación.--- El acto violatorio de la garantía de
"audiencia si bien es cierto es de carácter privativo
"y debe consistir en una merma o menoscabo en la
"esfera jurídica del particular, también lo es
"respecto del impedimento para el ejercicio de
"algún derecho, como lo es en el caso que nos
"ocupa el usar el bien para la construcción del
"centro aludido.--- El C. Juez al considerar que no
"se está privando de la posesión jurídica del predio
"ni de lo que lleva construido el quejoso, incurre en
"una confusión consistente en el hecho de que el
"acto reclamado por sí mismo está privando al
"quejoso de poder usar y disfrutar del bien objeto
"del comodato y de los derechos subjetivos que
"nacieron con el otorgamiento de la licencia de uso
"de suelo y de la construcción, ambos deben ser

"considerados como actos de privación porque
 "hacen un menoscabo manifiesto de su esfera
 "jurídica.--- Si se clausura la obra por no tener la
 "autorización de impacto ambiental se priva al
 "quejoso del derecho subjetivo que por las
 "licencias correspondientes le asisten de construir
 "el Centro Maguen David y de poder cumplir con el
 "objeto de comodato mismo.--- Los bienes
 "tutelados por la garantía de audiencia en el caso
 "que nos ocupa, son la posesión del bien y los
 "derechos subjetivos que nacieron por las licencias
 "mencionadas, por lo tanto es claro que dicha
 "garantía implica que el gobernado disponga de un
 "plazo razonable para contradecir las pretensiones
 "de la autoridad, oponer defensas, alegar la
 "ilegalidad de la denuncia, situación que en el caso
 "que nos ocupa no ocurrió, y que por ende originó
 "la violación constitucional aludida.--- Por otro
 "lado, la tesis que al respecto invoca el C. Juez en
 "la sentencia que se combate, no es aplicable al
 "caso en concreto, puesto que sí existe un acto de
 "privación de derechos, además de que nunca se
 "cumplieron cabal y rigurosamente las
 "formalidades esenciales del procedimiento, ni se
 "le aplicaron las leyes expedidas con anterioridad
 "al hecho juzgado.--- Por el acto reclamado
 "consistente en la resolución de 24 de abril de 1998
 "se afecta a la quejosa de la siguiente manera:--- 1.-
 "Se le pretende privar de su derecho de usar y

RECEIVED CO
 SECRETARÍA DE LA
 JUSTICIA DE ACU
 12 FEB 1999



"construir el predio del cual es poseedor de buena
 "fe, sin que se haya seguido juicio ante los
 "Tribunales previamente establecidos, además de
 "que en el procedimiento iniciado por la denuncia
 "promovida por la asociación civil hoy tercero
 "perjudicado, nunca se siguieron las formalidades
 "esenciales al procedimiento.--- 2.- Fue molestada
 "sin mandamiento de autoridad competente para
 "ejecutar e imponer modalidades por una
 "legislación que se considera inconstitucional,
 "según los conceptos de violación hechos valer.---
 "3.- No basta que la autoridad responsable señale
 "preceptos en los que aparentemente motive y
 "funde la causa legal del procedimiento sino que es
 "menester que exista una debida fundamentación y
 "motivación.--- 4.- Lo anterior, se indica porque la
 "autoridad no señala realmente las causas
 "materiales o de derecho que hayan dado lugar al
 "acto reclamado porque el decir simple y
 "llanamente que no se cuenta con la autorización
 "de impacto ambiental no es suficiente razón para
 "que el Juez determine que sí se fundó y motivó
 "el acto reclamado, máxime aún que dicho acto fue
 "emitido por autoridad incompetente, porque al
 "considerarse inconstitucional la ley que aplica, es
 "claro que carece de jurisdicción alguna al
 "emitirlo.--- A continuación se transcriben las
 "siguientes tesis jurisprudenciales: --- 'ACTOS
 "PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y

FE D-
 101-
 DOS-
 ALA

"EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.- (se transcribe).'-
 "COMPETENCIA. FUNDAMENTACIÓN DE LA.- (se
 "transcribe).'- 'ACTOS DE PRIVACIÓN A LOS QUE
 "SE REFIERE EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.
 "SU NATURALEZA.- (se transcribe).'- 'EJECUCIÓN
 "IRREPARABLE. ACTOS DE MOLESTIA.- (se
 "transcribe).'- 'AUDIENCIA, GARANTIA DE. NO SE
 "SATISFACE CON LA CITACIÓN.- (se transcribe).'-
 "CLAUSURA. GARANTÍA DE AUDIENCIA.- (se
 "transcribe).'- La licencia definida, según lo
 "señala Manuel Acosta Romero en su libro 'Teoría
 "General del Derecho Administrativo', es la facultad
 "que otorga el poder público para hacer algo, es el
 "derecho para realizar una conducta.--- En el
 "régimen de las licencias, sólo se deben cumplir
 "ciertos requisitos establecidos por la ley de la
 "materia, mismos que una vez cumplidos hacen
 "posible el otorgamiento, traduciéndose éste en dar
 "al gobernado la facultad para hacer determinada
 "cosa o realizar una conducta en específico.--- Lo
 "anterior nos lleva a la conclusión de que la
 "licencia de uso de suelo y de construcción
 "referida, otorgó a la quejosa la facultad o derecho
 "de construir el Centro Maguen David y por ende la
 "emisión del acto reclamado pretende privar
 "indefinidamente de este derecho que le asiste.---
 "En este orden de ideas se concluye que:--- El
 "proceder a la clausura de la construcción del
 "Centro Comunitario Maguen David es un acto de





SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FALSA
84

"privación en virtud de que se afectan derechos
"sustantivos del quejoso.--- 2.- Los derechos
"sustantivos del quejoso son aquéllos que
"nacieron:--- a) Con el contrato de comodato ya que
"éste fue otorgado para que la quejosa pudiera
"construir el Centro Maguen David, y usarlo
"conforme a los fines ahí señalados, afectándose
"así su posesión de buena fe.--- b) Con la licencia
"de uso de suelo, la cual desde el año de 1995
"permitía usar el predio objeto de comodato para la
"construcción del Centro Comunitario.--- c) Se
"debió dar antes de proceder a dictar resolución
"que ordenara la suspensión de la obra Centro
"Maguen David, garantía de audiencia para que
"éste estuviera en aptitud de ser oído y vencido en
"juicio.--- SEPTIMA VIOLACIÓN A LOS
"ARTÍCULOS 222 Y 352 DEL CÓDIGO FEDERAL DE
"PROCEDIMIENTOS CIVILES SUPLETORIAMENTE
"APLICADO, CON RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS
"76 Y 77 DE LA LEY DE AMPARO. --- El Señor Juez
"estimó de forma equivocada que los conceptos de
"violación 3° y 25 constitucionales resultaban
"inoperantes en virtud de que no atacan las
"consideraciones de la responsable ni los
"fundamentos que se aplicaron en la resolución
"contenida en el oficio E/CO2/DGPCC/5325 de
"veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y
"ocho, y su ejecución. --- Cuando se ataca un acto
"de autoridad no sólo se atacan las consecuencias

"inmediatas y ostensiblemente visibles, sino que
 "también es menester atacar todas y cada una de
 "las consecuencias futuras que conlleva no sólo la
 "emisión del acto reclamado, sino la ejecución del
 "mismo. --- En este orden de ideas, es claro y
 "notorio que la quejosa hiciera valer conceptos de
 "violación que permiten entender esas
 "consecuencias, futuras e inminentes consistentes
 "en que:--- 1.- Al suspenderse toda obra
 "relacionada con el Centro Maguen por la
 "aplicación de un precepto que se considera
 "inconstitucional se les priva innecesariamente de
 "trabajo lícito y honesto a obreros, ingenieros,
 "arquitectos, entre otros, privándoles a su vez de
 "un salario correspondiente por el ejercicio de su
 "trabajo.--- 2.- Se impide se concluya un proyecto
 "que daría un crecimiento económico notable que
 "sí repercutiría en la Nación a través de diversas
 "fuentes de ingresos, se daría la creación de
 "nuevos empleos con las consecuencias que le son
 "propias.--- 3.- Al suspender la obra del Centro
 "Maguen David se suspenden también empleos ya
 "otorgados como futuras fuentes de ingresos y
 "obviamente de ingresos, vulnerándose el artículo
 "25 constitucional, pues es el Estado al tener la
 "rectoría del desarrollo nacional, quien debe
 "impulsar bajo criterios de equidad social y
 "productividad, a las empresas de los sectores
 "privados y sociales en aras del bien común.--- 4.-





"Al suspender la obra del Centro Maguen David se
 "suspende a su vez que una vez concluido el
 "proyecto se cumplan con los fines a los que alude
 "el artículo 3° constitucional y que fueron indicados
 "en la demanda de garantías. --- 5.- Se suspende la
 "lucha contra la ignorancia, el fomento económico,
 "social y cultural, situaciones que garantiza nuestra
 "Carta Magna y que son de inminente interés
 "social. --- Por todo lo anterior se ve afectado por la
 "decisión del Señor Juez al considerarlos
 "inatendibles, ya que si hubiera vislumbrado todas
 "esas consecuencias que traería consigo la
 "ejecución del acto reclamado, hubiese llegado a
 "diversa conclusión. --- Por todo lo razonado es
 "procedente y así se solicita la modificación total
 "de la sentencia que se recurre, para el efecto de
 "que el amparo y protección se haga extensivo a la
 "ley reclamada y a todas las violaciones
 "constitucionales cometidas en perjuicio de la
 "quejosa."



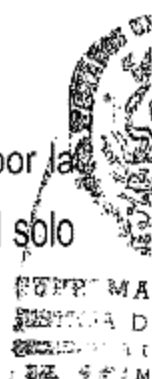
Oh...
 al M...
 JUEZ...
 A S.

CUARTO Por razones de método y en atención a la estrecha vinculación que existe entre ciertos agravios, el presente estudio se realiza en el estricto orden en que fueron aducidos éstos por la recurrente.

En su primer agravio, la recurrente expresa en síntesis que en el considerando quinto de la sentencia recurrida, el Juez consideró en forma equívoca que el acto reclamado consistente

en el Oficio No. E/CO2/DGPCC/5325 de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, que contiene la resolución que ordena la suspensión de la construcción del Centro Maguen David, A.C., y el inicio de un procedimiento de sanción, no era el primer acto de aplicación. Lo anterior en virtud de que:

1. De la licencia de construcción otorgada a la quejosa no se desprende obligación alguna, pues en el texto mismo no aparece precepto jurídico alguno con relación a la autorización de impacto ambiental; y
2. No se generó daño y perjuicio alguno a la quejosa por la expedición de la licencia que hiciera necesario, por el solo otorgamiento de ésta, la procedencia del amparo.



Que por tanto, resulta evidente que el Juez aplicó causales de sobreseimiento que no operaban en tanto que el amparo contra la Ley Ambiental del Distrito Federal, se había interpuesto oportunamente; toda vez que la resolución de veinticuatro de abril referida, implicaba el primer acto de aplicación que originó perjuicio.

En este sentido, conviene señalar que los elementos esenciales del juicio de amparo se desprenden de lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución General de la República, en el sentido de que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, o vulneren la soberanía de los



Estados si provienen de autoridades federales o invadan la esfera de éstas si provienen de las autoridades estatales (fracciones I, II y III), así como de lo dispuesto en el artículo 107, en cuanto a que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de **parte agraviada** (fracción I), que la sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare (fracción II, primer párrafo); y que el amparo no procederá sino una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios (fracciones III y IV). De estos elementos esenciales, se coincide en señalar como principios rectores del juicio de amparo a los siguientes: principio de acto de autoridad, principio de agravio personal y directo, principio de instancia de parte, principio de relatividad de la sentencia y principio de definitividad.

En lo que aquí interesa, debe atenderse al principio de agravio personal y directo referido, pues de su estudio se desprenderá si asiste o no la razón a la recurrente, en el sentido de levantar el sobreseimiento decretado respecto de la ley que reclama.

Este principio implica que sólo quien sufra un agravio o su representante legal, están facultados para promover la demanda de garantías. Este aspecto se encuentra regulado en los artículos 4º, 8º, 9º y 17 de la Ley de Amparo. En otras palabras, la promoción del amparo sólo incumbe al gobernado que ha sufrido o teme sufrir inminentemente un agravio en su esfera jurídica por cualquier acto de autoridad que estime inconstitucional. Conviene

señalar que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, **siempre que sea apreciable objetivamente**; y que este agravio debe recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, **no ser abstracto, genérico**; y ser de realización pasada; presente o inminente, es decir, **no simplemente eventual o aleatorio**.

Así las cosas, resulta claro que, entre otros, es requisito para la procedencia del amparo, como ya se destacó, que el acto de autoridad genere un agravio que pueda ser apreciable objetivamente, de manera que no se trate de un acto abstracto o genérico, o bien eventual o aleatorio.

En este orden de ideas, es evidente que no basta la aplicación de un precepto legal al gobernado para que éste se encuentre en aptitud de reclamarlo mediante la vía del amparo, sino que es necesario que esa aplicación se refleje de manera directa en un agravio o lesión a la esfera jurídica de ese gobernado en particular; esto es, es menester para considerar como primer acto de aplicación de una ley, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, que el acto constituya el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis controvertida.

De este modo, ha sido criterio reiterado del Poder Judicial de la Federación, en sus diferentes niveles, considerar que cuando una ley con motivo de su primer acto de aplicación no causa perjuicio la quejosa, debe sobreseerse respecto del mismo por



tema de interés jurídico. A manera de simple ejemplo, sirven de apoyo, en su parte relativa al tema de mérito, las tesis siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

"Tomo: III, Abril de 1996

"Tesis: P. LVII/96

"Página: 124

"LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO. Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las condiciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia.

"Amparo en revisión 5483/85. Granja San Germán de Guaymas, S. de P. R. de R.I. 8 de agosto de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el nueve de abril en curso, aprobó, con el número LVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de

"jurisprudencia. México, Distrito Federal, a nueve
"de abril de mil novecientos noventa y seis."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
"Gaceta

"Tomo: X, Julio de 1999

"Tesis: 2a./J. 67/99

"Página: 104

"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL
"PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO
"CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE
"SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO
"IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA
"OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU
"PERJUICIO. Si el quejoso reclama la
"inconstitucionalidad de una disposición con
"motivo del primer acto de aplicación debe
"demostrar que lo perjudica; si este no existe debe
"decretarse el sobreseimiento por falta de interés
"jurídico, con fundamento en los artículos 73,
"fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo,
"pero el sobreseimiento en los términos indicados
"no le impide volver a impugnar la ley o reglamento
"cuando en realidad se le aplique en su perjuicio.

"Amparo en revisión 78/98. Rogelio Nolasco
"Jiménez. 27 de marzo de 1998. Cinco votos.
"Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
"Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

"Amparo en revisión 2367/98. Radio Beep del Norte,
"S.A. de C.V. 6 de noviembre de 1998. Cinco votos.
"Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
"Secretaria: Alejandra de León González.

"Amparo en revisión 3237/98. Radio Beep del Golfo,
"S.A. de C.V. 19 de febrero de 1999. Unanimitad de
"cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco



**"Aleman. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
"Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martinez.**

**"Amparo en revisión 3023/98. Marino Ramirez
"Morales. 12 de marzo de 1999. Cinco votos.
"Ponente: José Vicente Aguinaco Aleman.
"Secretaria: Constanza Tort San Roman.**

**"Amparo en revisión 3432/98. Ediciones Andrade,
"S.A. de C.V. 7 de mayo de 1999. Unanimidad de
"cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco
"Aleman. Ponente: José Vicente Aguinaco Aleman;
"en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro
"Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: José
"Manuel Villeda Ayala.**

**"Tesis de jurisprudencia 67/99. Aprobada por la
"Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
"privada del cuatro de junio de mil novecientos
"noventa y nueve."**

Ahora bien, tal y como lo señaló el A quo en la sentencia recurrida, en la copia certificada de la licencia de construcción que obra a fojas 158 del expediente de amparo, se cita como fundamento jurídico de la misma al precepto reclamado; sin embargo, conforme se ha venido exponiendo y como lo refiere la recurrente, es claro que no era suficiente esta mera referencia o cita del artículo impugnado para hacer procedente la vía del amparo, pues faltaba la actualización real y objetiva del agravio en contra de la ahora impetrante de garantías; agravio éste que se actualizó hasta que fue emitido el Oficio No. E/CO2/DGPCC/5325 y que es señalado como acto reclamado en la demanda de garantías presentada por la hoy recurrente.

En efecto, el artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental del Distrito Federal, el cual fue señalado como acto reclamado en el presente juicio de garantías, a la letra dice:

**" Artículo 27.- Dentro del suelo urbano no se
"requerirá autorización de impacto ambiental, salvo
"tratándose de las siguientes obras y actividades:--
"- V.- Obras de más de diez mil metros cuadrados
"de construcción u obras nuevas en predios de
"más de cinco mil metros cuadrados para uso
"distinto al habitacional."**

Siguiendo este orden de ideas, del contenido de la copia certificada de la licencia de construcción a que se ha hecho referencia, se advierte que al ser expedida se citó, entre otros artículos como fundamento jurídico, el precepto reclamado; pero no obstante lo anterior, dicho precepto no le causaba perjuicio a la quejosa desde ese momento, dado que resulta evidente que la emisión de ese acto, era en su beneficio pues se le autorizaba para llevar a cabo las obras de construcción respectivas, por lo que en ese momento no sufrió perjuicio alguno, contrariamente a lo considerado por el Juez de Distrito del conocimiento.

Es por lo anterior, que le asiste la razón jurídica a la quejosa cuando afirma que al expedirse el oficio número E/CO2/DGPCC/5325, de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, con fundamento en el precepto reclamado, es cuando éste le causa perjuicio, en virtud de que con motivo de la expedición de ese oficio, se suspendieron las



...ras de construcción que le habían sido autorizadas, se le requirió para que presentara manifestación de impacto ambiental, se inició procedimiento administrativo de sanción en su contra, así mismo se ordenó que se publicara el resumen del proyecto en un diario de circulación nacional (fojas 38 a 43 del cuaderno principal); actualizándose en su perjuicio, de esta manera, los supuestos contenidos en el precepto reclamado.

Sobre este punto en particular, cobra perfecta actualización lo dispuesto en la siguiente Tesis Plenaria de este Alto Tribunal:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

"Gaceta

"Tomo: III, Mayo de 1996

"Tesis: P. LXVII/96

"Página: 113

**"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA.
"PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON,
"NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS
"RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE
"SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS
"EN ELLAS. Aun cuando en una orden de visita o
"el acta relativa que se reclamen en amparo y que
"tuvieren por objeto verificar si la negociación de la
"quejosa cumple con la ley, también impugnada,
"las autoridades responsables mencionen las
"disposiciones reclamadas, esa circunstancia no
"es suficiente para considerar que éstas ya fueron
"aplicadas, si no existen actos concretos que
"actualicen lo dispuesto por las normas. En esas
"condiciones, si no se han actualizado las hipótesis
"previstas en las disposiciones legales, debido a
"que la autoridad administrativa no ha utilizado la
"facultad que le confieren, no puede estimarse que
"ya existía acto concreto de aplicación. Así las**

"cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo.

"Amparo en revisión 7817/82. Soledad Bernal Espinoza. 4 de octubre de 1982. Mayoría de diecisiete votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Arturo Iturbe Rivas.

"Amparo en revisión 557/95. Espectáculos y Diversiones Luci, S.A. 11 de marzo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios por estar desempeñando un encargo extraordinario. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de abril en curso, aprobó, con el número LXVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veinticinco de abril de mil novecientos noventa y seis."

Dentro de este contexto y de conformidad con las anteriores consideraciones y criterios de esta Suprema Corte, lo procedente es declarar fundado el primer agravio aducido por la quejosa recurrente y, por tanto, entrar al estudio del primer concepto de violación cuyo análisis y estudio fue omitido en virtud del referido sobreseimiento decretado respecto del artículo 27, fracción V de la Ley Ambiental del Distrito Federal.



En su primer concepto de violación, la quejosa, ahora recurrente, reclamó la inconstitucionalidad del artículo 27, fracción V de la Ley Ambiental del Distrito Federal, por dos razones fundamentales:

I. Porque el precepto reclamado, en su opinión, viola el artículo 27 Constitucional al imponer una modalidad muy grave a la propiedad privada, pues el hecho de que no se cuente con una autorización de impacto ambiental no se puede gozar de los atributos de la propiedad privada, sin que exista para tal efecto algún sustento o justificación en la norma suprema.

II. Que el artículo reclamado es inconstitucional en virtud de que el órgano legislativo que lo creó (Asamblea de Representantes del Distrito Federal), no tiene competencia para imponer las modalidades a que se refiere el texto constitucional en su artículo 27, pues dicha facultad corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.

En este sentido, se tiene que el artículo 27 Constitucional, en su tercer párrafo expresa que *...la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.*

En cuanto a qué debe entenderse por modalidades a la propiedad privada, la doctrina refiere lo siguiente:

El Diccionario Jurídico Mexicano, establece que *Es la facultad del Estado mexicano para modificar el modo de manifestación o externación de los atributos de la propiedad, por razones de interés público o social.*

Para Gabino Fraga, estas modalidades constituyen una medida de carácter general y abstracto que viene a integrar y a configurar, no a transformar, el régimen jurídico de la propiedad general de los bienes en un momento y en un lugar determinados.

Así mismo, este autor refiere que *...la modalidad sólo afecta el régimen jurídico de la propiedad imponiendo una acción o una abstención, en tanto que el ejercicio absoluto de aquélla puede causar un perjuicio a algún interés social cuya salvaguardia esté encomendada al Estado.*

Diego Valadés, en su comentario al artículo 27 Constitucional realizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., indica que *...la modalidad es una medida legal de carácter general que restringe el derecho de usar, disfrutar y disponer de una cosa.*

Por su parte, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, se pronunció al respecto en la tesis jurisprudencial siguiente:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 157-162 Primera Parte

"Página: 315



"PROPIEDAD PRIVADA; MODALIDAD A LA.
"ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE
"CONFIGURE. Por modalidad a la propiedad
"privada debe entenderse el establecimiento de una
"norma jurídica de carácter general y permanente
"que modifique, esencialmente, la forma de ese
"derecho. Son, pues, elementos necesarios para
"que se configure la modalidad, primero, el carácter
"general y permanente de la norma que la impone y
"el segundo, la modificación substancial del
"derecho de propiedad en su concepción vigente.
"El primer elemento requiere que la regla jurídica
"se refiera al derecho de propiedad sin especificar
"ni individualizar cosa alguna, es decir, que
"introduzca un cambio general en el sistema de
"propiedad y, a la vez, que esa norma llegue a crear
"una situación jurídica estable. El segundo
"elemento implica una limitación o transformación
"del derecho de propiedad; así, la modalidad viene
"a ser un término equivalente a limitación o
"transformación. El concepto de modalidad a la
"propiedad privada se aclara con mayor precisión
"si se estudia desde el punto de vista de los
"efectos que produce en relación con los derechos
"del propietario. Los efectos de la modalidad que
"se imponga a la propiedad privada consisten en
"una extinción parcial de los atributos del
"propietario, de manera que éste no sigue gozando,
"en virtud de las limitaciones estatuidas por el
"Poder Legislativo, de todas las facultades
"inherentes a la extensión actual de su derecho.

"Volúmenes 133-138, página 155. Amparo en
"revisión 6408/76. María Fortes de Lamas. 18 de
"marzo de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.
"Ponente: Arturo Serrano Robles.

"Volúmenes 139-144, página 224. Amparo en
"revisión 3957/76. Estacionamientos de San
"Francisco, S. A. 18 de noviembre de 1980.
"Unanimidad de diecinueve votos. Ponente:
"Atanasio González Martínez.

"Volúmenes 157-162, página 299. Amparo en
"revisión 3221/76. Estacionamientos Gante, S. de R.
"L. y C. V. 17 de marzo de 1981. Unanimidad de
"diecinueve votos. Ponente: Fernando Castellanos
"Tena.

"Volúmenes 157-162, página 299. Amparo en
"revisión 798/77. Ranver Compañía Mexicana de
"Estacionamientos, S. A. 17 de marzo 1981.
"Unanimidad de diecinueve votos. Ponente:
"Eduardo Langle Martínez.

"Volúmenes 157-162, página 315. Amparo en
"revisión 3386/76. Ranver Compañía Mexicana de
"Estacionamientos, S. A. 16 de febrero 1982.
"Unanimidad de veinte votos. Ponente: Manuel
"Gutiérrez de Velasco."

Con base en lo anterior, es válido estimar que la imposición
de modalidades a la propiedad privada se traduce
necesariamente en la supresión o en la limitación de alguno de
los derechos reales inherentes y consubstanciales a ella, como lo
son el derecho a usar la cosa, el de disfrutar de la misma y el de
disponer de ésta.

Así las cosas, las servidumbres sirven como ejemplo clásico
de las modalidades al derecho de propiedad a que se refiere el
artículo 27 de nuestra Constitución, en tanto que, en este caso, la
propiedad persiste mientras el propietario conserva el derecho de
disponer de su propiedad vendiéndola o cediéndola a otra
persona, aun cuando haya perdido el derecho de usarla y de
obtener sus frutos. En este caso se dice que tiene la *nuda*
propiedad. En consecuencia, la esencia del derecho de propiedad
está en ese derecho irreductible denominado *nuda propiedad*.



Por ende, sólo a través de los elementos distintivos de la propiedad, como lo son el uso, goce y disfrute del bien; puede existir la posibilidad de que se impongan modalidades a la propiedad privada, es decir, cuando se suprima o limite alguno de esos derechos y no simplemente cuando, tal y como acontece en el presente caso, se afecte de cualquier manera la cosa o bien (como puede ser mediante la exigencia de un estudio de impacto ambiental para su construcción) que implique su materia de goce o ejercicio, pues debe tenerse muy presente **que no es lo mismo la materia de un derecho al derecho en cuanto tal**, de lo que resulta que la imposición de modalidades a una cosa o bien no equivale a la imposición de modalidades a los derechos reales que sobre dicha cosa o bien se tengan, sino sólo en la medida que éstos se limiten o restrinjan.

En este orden de ideas, si por virtud del artículo reclamado únicamente se obliga al propietario o constructor, a realizar un estudio de impacto ambiental, no puede considerarse que dicha obligación importe una imposición de modalidades a la propiedad privada en los términos del artículo 27 Constitucional, porque con ello no se entraña ninguna afectación a los derechos de la propiedad en sí mismos considerados. Esto es, la quejosa tiene a salvo sus derechos de uso, goce y disfrute sobre el predio en el que pretende llevarse a cabo la construcción, con todas las facultades que dichos derechos implican; en tanto que la obligación de contar o llevar a cabo con un estudio de impacto ambiental deriva de la construcción de una edificación con ciertas características especiales, sin que esta obligación afecte en forma

alguna los ya multicitados derechos de uso, goce y disfrute sobre el predio en cuestión.

Al haber quedado demostrado que la obligación impuesta por la fracción V del artículo 27 de la Ley Ambiental para el Distrito Federal, no constituye una modalidad a la propiedad en términos del artículo 27 Constitucional, lo procedente es declarar infundado este primer concepto de violación cuyo análisis fue omitido en la sentencia recurrida.

No obstante haberse demostrado que este precepto no establece modalidades a la propiedad y en consecuencia resulta innecesario el estudio del segundo aspecto del primer concepto de violación (reseñado en el punto II), para mejor ilustración y a manera de mero apoyo a todo lo anteriormente expuesto, se estima conveniente precisar, en cuanto a qué órgano legislativo del Estado compete imponer las modalidades a la propiedad privada, lo siguiente:

El texto del tercer párrafo del artículo 27 Constitucional, señala expresamente que es la Nación la que en todo tiempo tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Sin embargo, esta declaración no debe entenderse como una facultad de la Nación, toda vez que la Nación no tiene competencia, en tanto que esta corresponde a los órganos del Estado. En esta virtud es que se ha considerado acertadamente que es el Congreso Federal el facultado legalmente para imponer las modalidades referidas, a través de las leyes que expida. No obstante lo anterior, esta



La facultad legislativa no opera en todos los casos, pues es menester para ello, que el interés público que legitime constitucionalmente la imposición de la modalidad a la propiedad privada, incida en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro competencial de dicho Congreso; de manera tal que si, por el contrario, tal ramo o materia incumben legislativamente a los Congresos de los Estados por virtud del principio contenido en el artículo 124 de la Constitución, las leyes que impongan modalidades a la propiedad privada pueden provenir de los referidos Congresos locales.

Esta última consideración encuentra apoyo en lo previsto por la fracción II del artículo 121 de nuestra Constitución que consagra el principio *lex rei sitae*, al disponer que: *Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación*. Así pues, es evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho sería inconcebible; en tal virtud, la imposición de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. En conclusión, respecto de los bienes muebles o inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, las legislaturas locales pueden dictar las leyes que regulen su uso, goce y disponibilidad, siempre que el interés público que funde dicha regulación no concierna a ninguno de los ramos o materias que sea de la competencia constitucional del Congreso de la Unión, integrada por las facultades expresas e implícitas de dicho órgano legislativo federal. Considerar lo contrario, esto es, que el Congreso de la Unión, en todos los

casos, es el único facultado para imponer modalidades a la propiedad privada en términos del artículo 27 Constitucional, implicaría un impedimento para establecer modalidades necesarias para el interés público, en tanto que el Congreso dejaría de establecer estas modalidades necesarias al no atender ciertas materias por ser estas propias de los Estados, en tanto que los Estados, no obstante ser los encargados de estas materias por mandato constitucional, tampoco podrían establecer estas imposiciones, al considerar que el Congreso sería el único facultado para ello; lo cual no es de ninguna manera válidamente aceptable.

Agotado el estudio del primer concepto de violación, mismo que ha sido declarado infundado, se procede a continuación al análisis del segundo agravio expresado por la quejosa recurrente.

En su segundo agravio, la recurrente refiere esencialmente que el A quo sobreseyó erróneamente respecto de los actos atribuidos al Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal, por considerar que no existía el acto reclamado a esta autoridad, sin que en la audiencia se probara la existencia de este acto. La recurrente apoya lo anterior, en el argumento relativo a que de la parte superior derecha del oficio reclamado, se desprende que la dependencia que lo emite es la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, situación que por obviedad de razones hace prueba plena y permite observar que el acto atribuido a dicha autoridad es cierto.



Asimismo y sobre lo anterior, la recurrente manifiesta que de autos se desprende que el informe rendido por la autoridad en comento no tiene validez alguna, pues se refiere a un escrito de ampliación de demanda que nunca se efectuó; por lo que al carecer dicho informe de relación alguna con el juicio en cuestión, el A quo debió considerar como ciertos los actos reclamados a dicha autoridad.

Sobre este aspecto, de la lectura del capítulo de la demanda de amparo relativo a los actos reclamados, se desprende que la quejosa recurrente reclamó del Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal, la expedición del oficio E/CO2/DGPCC/5325 de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, así como la aplicación en su perjuicio, por primera vez de la ley y acuerdos reclamados.

En este sentido, el artículo 5° de la Ley de Amparo que establece quiénes son parte en el juicio de amparo, señala con este carácter, en su fracción II, a la autoridad o autoridades responsables; en tanto que el numeral 11 de este mismo ordenamiento, dispone que: *Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado.*

Por su parte, los artículos 116 y 166 de la referida Ley de Amparo, que establecen los requisitos tanto de la demanda del amparo indirecto como del directo respectivamente, disponen como uno de ellos el hecho de señalar a la autoridad o autoridades responsables. Sin embargo, esta exigencia no debe

considerarse de ninguna manera como un acto caprichoso del legislador, sino por el contrario, como un elemento esencial para la adecuada substanciación del juicio de garantías en aras de la equidad procesal, en tanto que por virtud del indicado requisito se consigue que el Juez Constitucional no examine la validez de un acto de autoridad sin que aquélla de quien procede haya tenido oportunidad de probar y alegar en defensa de la validez de su acto.

En esta virtud, de conformidad con lo anterior, debe considerarse como autoridad responsable a aquélla que por su especial intervención en el acto reclamado, está obligada a responder de la constitucionalidad del mismo, en la controversia que se plantea ante los Tribunales de la Federación; siendo fundamental para este objeto, considerar la intervención que tienen estas autoridades en el acto reclamado, respecto de lo cual debe atenderse a la existencia de dos situaciones jurídicas diferentes: por una parte, el origen o procedencia de dicho acto y, por la otra, la ejecución del mismo.

Así las cosas, si el Oficio No. E/CO2/DGPCC que contiene el acto reclamado, fue firmado por el Director General de Prevención y Control de la Contaminación, sin que conste que lo hace por acuerdo de otro, en este caso el Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal; es claro que dicha manifestación de voluntad única y exclusivamente se refiere a dicho Director General, sin que sea óbice para llegar a esta aseveración el hecho de que el papel donde se contiene el acto reclamado esté membretado con el nombre de la Secretaría del Medio Ambiente,



AMPARO EN REVISIÓN 686/99

pues conviene destacar que en el presente caso no se controvierte la competencia del órgano que emite el citado oficio, en cuyo caso sí sería trascendente dicho membrete, en tanto que el Director General de Prevención y Control de la Contaminación actúa dentro del ámbito de facultades atribuidos a la Secretaría de Estado respectiva; pero al no controvertirse la competencia del órgano, la existencia del membrete no es suficiente para modificar el sentido de la sentencia recurrida, al no ser aceptable el hecho de considerar que la expresión de la voluntad personal del Director de referencia, equivalga a la de la Secretaría del Medio Ambiente.

En conclusión, el membrete del Oficio reclamado no es suficiente para considerar que el mismo entrañe expresión de voluntad alguna por parte del Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal, aunado a que del contenido e interpretación de los citados artículos 5°, 11, 116 y 166 de la Ley de Amparo, es suficiente el señalamiento del Director General de Prevención y Control de la Contaminación, para cumplir con el fin de estos preceptos, consistente en dar intervención a la autoridad o autoridades de las que emana el acto de manera que puedan defender y alegar sobre la constitucionalidad del mismo.

Por lo anterior, es el caso de declarar infundado este segundo agravio y, por tanto, confirmar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de los actos atribuidos al Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal.

La recurrente refiere en su tercer agravio, lo siguiente:

Que al considerar como inconstitucional el artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental, es claro que también consideró inconstitucional el artículo 10 del Acuerdo que Establece el Listado de Obras o Actividades que Requieren Autorización de Impacto Ambiental; tal y como puede apreciarse a fojas 14 de la demanda en la que se señaló de forma precisa que este Acuerdo adolecía de los mismos vicios de inconstitucionalidad de la Ley reclamada. Que es así, que el Juez de Distrito no interpretó adecuadamente la demanda hecha valer, reduciéndose a afirmar infundadamente que no se había atacado de inconstitucional el acuerdo mismo, sino únicamente la aplicación de éste por las autoridades señaladas en la demanda.

Es fundado el anterior aspecto de agravio, aunque insuficiente para modificar la sentencia recurrida, en virtud de lo que a continuación se expone:

En la parte relativa de su sentencia, visible a fojas 330 del expediente principal, el A quo expuso lo siguiente:

"...Por otra parte antes de examinar el fondo del asunto, debe advertirse que la quejosa únicamente reclamó la aplicación del Acuerdo que establece el listado de obras o actividades que requieren autorización de impacto ambiental, las modalidades para su evaluación y los formularios e instructivos aplicables, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el siete de abril de mil



**"novecientos noventa y siete, mas no el acuerdo en
"sí mismo...."**

La anterior consideración resulta desacertada, pues tal y como lo refiere la quejosa recurrente, en la hoja 14 de su demanda de garantías, en lo que aquí interesa, señaló:

**"...En este orden de ideas se debe precisar ante
"todo que la 'propiedad privada' está garantizada
"por nuestra Constitución como un 'derecho', y
"como tal, debe ser respetado por todas y a cada
"una de las autoridades responsables, quienes
"carecen constitucionalmente de la facultad de
"imponer modalidades a la propiedad privada de la
"quejosa con base en las argumentaciones vertidas
"anteriormente y que conforman este primer
"concepto de violación, asimismo el artículo 10 del
"acuerdo que establece el listado de obras o
"actividades que requieren autorización de impacto
"ambiental, las modalidades para su evaluación y
"los formularios e instructivos aplicables, adolece
"de los mismos vicios de inconstitucionalidad...."**

Así las cosas, es fácil advertir que tal y como se refiere en el agravio en estudio, la recurrente sí reclamó el Acuerdo de mérito en sí mismo, por lo que el Juez de Distrito no debió haber decretado el sobreseimiento respecto del mismo.

No obstante lo anterior, como ya se dijo, dicho argumento es insuficiente para modificar la sentencia recurrida, pues si en términos de lo aducido por la propia recurrente, se combatió la inconstitucionalidad de este Acuerdo por los mismos vicios aducidos respecto de la Ley reclamada, debe entenderse que se combate el Acuerdo por establecer *modalidades a la propiedad privada*, en tanto que ya quedó establecido que los requisitos que establece tanto la Ley como el Acuerdo reclamados, no constituyen modalidades a la propiedad privada, en términos de lo expuesto sobre este tema al contestar el primer concepto de violación aducido por la quejosa recurrente, argumentos ^{éstos} que no se transcriben en obvio de repeticiones.

La recurrente señala básicamente en su cuarto agravio que resulta inaplicable la tesis citada por el A quo en la **sentencia** recurrida, cuyo rubro es **ZONIFICACIÓN, CONSTANCIA DE. NO CONSTITUYEN DERECHOS**, al referir que basta una simple lectura de la tesis de referencia para confirmar que la licencia de uso de suelo es la que limita o restringe el uso de los inmuebles en determinadas zonas, por lo que es claro que se está en presencia de un derecho adquirido bajo el amparo de leyes anteriores.

La recurrente continúa argumentando en este agravio, que para desestimar el segundo concepto de violación de la demanda, el Juez de Distrito se limita a manifestar que del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, se advierte que la licencia de uso de suelo es un mero requisito. Que así las cosas, el Juez A quo no tuvo cuidado en dar lectura al artículo 71 del propio

AMPARO EN REVISIÓN 686/99



Reglamento referido, de cuya simple lectura puede percatarse que esta licencia no es un mero requisito, sino que es un derecho adquirido pues así lo reconoce la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; por lo que atendiendo a la supremacía jerárquica de la ley sobre el reglamento, se prohíbe que éste contradiga a aquélla, so pena de invalidez.

Es claro que las anteriores argumentaciones son formuladas con el único objeto de demostrar que la recurrente cuenta con un derecho adquirido bajo el amparo de leyes anteriores, siendo así el caso de determinar si esta aseveración es correcta.

No pasa desapercibido para esta Primera Sala que, tal y como lo afirmó el A quo en la sentencia recurrida, a fojas 158 del expediente principal, obra una copia certificada por la Dirección General de Control y Prevención de la Contaminación del Distrito Federal, de cuyo contenido se advierte que el artículo reclamado, esto es, el 27 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, sirvió como fundamento para la expedición de los permisos y licencias correspondientes en favor de la quejosa recurrente.

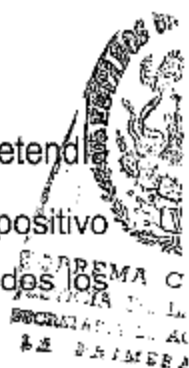
Así mismo se puede advertir que los trámites y permisos respectivos fueron tramitados y emitidos dentro de distintas fechas, pero todas ellas del año de mil novecientos noventa y siete.

Por su parte, la Ley reclamada, de conformidad con su artículo primero transitorio, entró en vigor el miércoles diez de julio

de mil novecientos noventa y seis, esto es, aproximadamente un año antes del nacimiento del acto reclamado.

De este modo, no puede válidamente hablarse ni de retroactividad de leyes ni de derechos adquiridos, pues de todo lo anterior resulta fácil advertir que la quejosa se duele de una obligación que le impuso un dispositivo legal vigente al momento de los hechos que implican los antecedentes de los actos materia del presente asunto.

Por tanto, es evidente que la construcción que pretendía llevar a cabo la quejosa, estaba regulada por el dispositivo reclamado desde el momento mismo en que fueron otorgados los permisos y licencias correspondientes.



Por su parte, no pasa inadvertido que la autoridad desde el momento del otorgamiento de estos permisos, debió requerir a la quejosa, en términos del artículo 27 de la Ley Ambiental para el Distrito Federal, para que exhibiera el estudio de impacto ambiental a que este artículo se refiere; lo cual evidentemente no fue hecho.

Así las cosas, no obstante que la quejosa recurrente no sufrió un perjuicio con la simple mención de este precepto en los permisos correspondientes, lo cierto es que este perjuicio no se actualizó debido a la falta de acción de las autoridades, pero no porque el acto no estuviera regulado por el dispositivo reclamado.



Sin embargo, de ninguna manera podría aceptarse que debido a que la autoridad dejó de respetar un dispositivo legal en el momento idóneo para hacerlo valer, este dispositivo nunca más podría hacerse valer en el caso, pensando en que ello implicaría una retroactividad del mismo; ello aunado a que los derechos adquiridos son precisamente eso, derechos, mismos que no pueden tener otro origen que la propia ley, siendo que, en este caso, se pretende precisamente lo contrario, es decir, alegar la adquisición de derechos con base en una falta de actuación de la autoridad, la que dejó de aplicar el ordenamiento reclamado desde un principio.

Cabe aclarar que las consideraciones relativas a este cuarto agravio, en forma alguna pugnan con las vertidas en la parte de esta resolución en que se estudia y da respuesta al primer agravio en el que, como se recordará, se levantó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito por lo que hace a la ley reclamada. Esto es así pues como ya se dijo en esa parte, la procedencia del juicio de garantías requiere, entre otras cosas, de dos circunstancias fundamentales: la aplicación de una ley y que dicha aplicación cause un perjuicio o agravio al gobernado. En tal virtud, no puede considerarse que el momento oportuno para la promoción del juicio de amparo de donde emana este recurso, fuera, como lo señaló el A quo, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento del permiso, pues en ese momento faltaba el segundo presupuesto señalado que es la falta de perjuicio; sin embargo, la anterior consideración no puede servir de justificación para establecer que la falta de actuación de las autoridades generó un derecho en favor de la quejosa recurrente,

implicando que la posterior exigencia de la obligación contenida en la norma reclamada, conlleve a una aplicación retroactiva de la misma.

Es por estas razones que lo procedente es declarar infundado este cuarto agravio.

La quejosa recurrente expresa en su quinto agravio, que demostró con todas las pruebas que presentó en el juicio de amparo, que cuenta con todas y cada una de las licencias y permisos que establecen las leyes de la materia, de donde se desprende fehacientemente que en la sentencia recurrida no se valoraron las pruebas en su conjunto y se omitió examinar debidamente cada una de ellas, sin señalarse los motivos o causas que se tuvieron para desestimar dichas probanzas.

Toda vez que el anterior agravio se refiere a cuestiones de legalidad, como lo es la indebida valoración de pruebas, es el caso de reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que sea éste el encargado del estudio y análisis de este agravio. Lo anterior con fundamento en el artículo 92 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Artículo 92.- Cuando en la revisión subsistan y concurren materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Colegiado de Circuito, se remitirá el asunto a aquella. --- La Suprema Corte resolverá la revisión



**"exclusivamente en el aspecto que corresponda a
"su competencia, dejando a salvo la del Tribunal
"Colegiado de Circuito."**

En su sexto agravio sostiene la quejosa recurrente que en el considerando sexto de la sentencia recurrida, el Juez consideró en forma indebida que la resolución de veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, es un acto de molestia y no de privación, y que por lo tanto la responsable no tenía obligación de otorgarle garantía de audiencia, lo cual es inexacto, pues el A quo olvidó que la garantía de audiencia corresponde a todo gobernado susceptible de ser parcial o totalmente sujeto de actos de autoridad.

Concluye la recurrente su agravio, sosteniendo que la tesis que al respecto invoca el Juez de Distrito no es aplicable al caso en concreto, puesto que sí existe un acto de privación de derechos, además de que nunca se cumplieron cabal y rigurosamente las formalidades esenciales del procedimiento, ni se le aplicaron leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado.

Es infundada la anterior aseveración en términos de la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

"Gaceta

"Tomo: IV, Julio de 1996

"Tesis: P./J. 40/1996

"Página: 5

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA.
 "ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El
 "artículo 14 constitucional establece, en su
 "segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de
 "la vida, de la libertad o de sus propiedades,
 "posesiones o derechos, sino mediante juicio
 "seguido ante los tribunales previamente
 "establecidos, en el que se cumplan las
 "formalidades esenciales del procedimiento y
 "conforme a las leyes expedidas con anterioridad al
 "hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo
 "Ordenamiento Supremo determina, en su primer
 "párrafo, que nadie puede ser molestado en su
 "persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,
 "sino en virtud de mandamiento escrito de la
 "autoridad competente, que funde y motive la
 "causa legal del procedimiento. Por consiguiente,
 "la Constitución Federal distingue y regula de
 "manera diferente los actos privativos respecto de
 "los actos de molestia, pues a los primeros, que
 "son aquellos que producen como efecto la
 "disminución, menoscabo o supresión definitiva de
 "un derecho del gobernado, los autoriza solamente
 "a través del cumplimiento de determinados
 "requisitos precisados en el artículo 14, como son,
 "la existencia de un juicio seguido ante un tribunal
 "previamente establecido, que cumpla con las
 "formalidades esenciales del procedimiento y en el
 "que se apliquen las leyes expedidas con
 "anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los
 "actos de molestia que, pese a constituir afectación
 "a la esfera jurídica del gobernado, no producen los
 "mismos efectos que los actos privativos, pues
 "sólo restringen de manera provisional o
 "preventiva un derecho con el objeto de proteger
 "determinados bienes jurídicos, los autoriza, según
 "lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando
 "preceda mandamiento escrito girado por una
 "autoridad con competencia legal para ello, en
 "donde ésta funde y motive la causa legal del
 "procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la
 "constitucionalidad o inconstitucionalidad de un



RECEIVED
 SUPLENTE DE LA
 SECRETARÍA DE JUSTICIA
 Y FALLO
 10/10/2000



"acto de autoridad impugnado como privativo, es
"necesario precisar si verdaderamente lo es y, por
"ende, requiere del cumplimiento de las
"formalidades establecidas por el primero de
"aquellos numerales, o si es un acto de molestia y
"por ello es suficiente el cumplimiento de los
"requisitos que el segundo de ellos exige. Para
"efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad
"que con el acto se persigue, esto es, si la
"privación de un bien material o inmaterial es la
"finalidad connatural perseguida por el acto de
"autoridad, o bien, si por su propia índole tiende
"sólo a una restricción provisional.

"Amparo en revisión 1038/94. Construcciones
"Pesadas Toro, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1995.
"Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús
"Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal.

"Amparo en revisión 1074/94. Transportes de Carga
"Rahe, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1995. Mayoría
"de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño
"Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera.

"Amparo en revisión 1150/94. Sergio Quintanilla
"Cobián. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez
"votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
"Secretaria: Susana Alva Chimal.

"Amparo en revisión 1961/94. José Luis Reyes
"Carbajal. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez
"votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
"Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera.

"Amparo en revisión 576/95. Tomás Iruegas
"Buentello y otra. 30 de octubre de 1995. Mayoría
"de nueve votos. Ponente: Juventino V. Castro y
"Castro. Secretario: Teódulo Angeles Espino.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
"el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el
"número 40/1996, la tesis de jurisprudencia que

**"antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro
"de junio de mil novecientos noventa y seis."**

En términos de lo dispuesto por el anterior criterio jurisprudencial, puede fácilmente advertirse que la suspensión de la construcción del Centro Maguén David, A.C., por no contar con el estudio de impacto ambiental a que se refiere el artículo reclamado, se trata de un acto de molestia y no de privación, en tanto que, por una parte, la quejosa puede disponer libremente de su predio ya que su derecho de propiedad no se ve afectado por esta determinación y, por otra, porque la afectación que sufre la quejosa respecto a la suspensión de la construcción no implica una supresión definitiva de los derechos de la quejosa, pues esta suspensión sólo tiene vigencia en tanto aquella no exhiba el estudio que se le requiere.



Por lo anterior, también es claro que al no tratarse de un acto de privación, no se requiere de un juicio previo, ya que al no ser privativo es evidente que el acto reclamado no se rige por lo dispuesto en el artículo 14 de nuestra Constitución, sino por lo preceptuado por el diverso numeral 16, relativo a los actos de molestia, siendo que esta Primera Sala advierte que los requisitos previstos por este último precepto fueron cumplidos cabalmente en el acto reclamado, en tanto que consta en mandamiento escrito, emana de autoridad competente y en él se fundan y motivan las causas que lo originan.

En este orden de ideas, resulta que no asiste la razón a la recurrente en cuanto a que el A quo aplicó incorrectamente la tesis de jurisprudencia referida en el agravio de mérito, pues ya



quedó claro que tal y como lo señaló el Juez de Distrito, el acto reclamado implica un acto de molestia, además de que, por otra parte, igualmente quedó demostrado en la presente resolución que el acto reclamado sí tiene su origen en leyes expedidas con anterioridad al acto.

Es por lo anterior que se declara infundado este sexto agravio.

En su séptimo y último agravio, la recurrente vierte argumentos en el sentido de que fue errónea la determinación del A quo, en cuanto a declarar inoperantes los conceptos de violación en los que se alegó violación a los artículos 3° y 25 de la Constitución, bajo el argumento de que éstos no atacaban las consideraciones de la responsable ni los fundamentos que se aplicaron en la resolución combatida y su ejecución, siendo que si el juzgador de amparo hubiera vislumbrado todas las consecuencias que traería consigo la ejecución del acto reclamado, hubiese llegado a diversa conclusión.

Es inoperante este último agravio, en tanto que es notorio que la recurrente no cuenta con el interés jurídico necesario para reclamar violaciones a los artículos 3° y 25 constitucionales, bajo la argumentación consistente en que con el acto reclamado se priva a muchas personas de educación y trabajo, lo que impide y dificulta el desarrollo nacional; pues suponiendo sin conceder que así fuera, serían estas personas las afectadas y consecuentemente las legitimadas para acudir en la vía de amparo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Esto es,

la recurrente no reclama que con el acto reclamado se le prive a su persona de educación o de trabajo, sino que alega que se priva a otras personas, por lo que resulta que en todo caso, son estas personas que tentativamente pudieran verse afectadas de esta forma y en los términos que expone la quejosa recurrente, las legalmente indicadas para demandar la protección de la Justicia Federal.

En atención a todo lo hasta aquí expuesto es el caso de modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el presente juicio respecto de los actos atribuidos al Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal; levantar el sobreseimiento decretado respecto del artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental del Distrito Federal; negar el amparo solicitado, así como reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal en turno, para que se ocupe de las cuestiones de legalidad.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- En la materia de la revisión competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Centro Maguen David, A. C., respecto de los actos atribuidos al Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal.



TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a CENTRO MAGUEN DAVID, A.C., en contra de los actos reclamados a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Presidente de la República y Jefe de Gobierno del Distrito Federal consistentes en la expedición refrendo y publicación del artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

CUARTO.- Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, en turno, respecto de las cuestiones de legalidad de su competencia.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos al referido Tribunal y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Juventino V. Castro y Castro, Juan N. Silva Meza (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios.

Firman el Presidente de la Sala y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

**EL MINISTRO PRESIDENTE
DE LA PRIMERA SALA:**

JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO

MINISTRO PONENTE:

JUAN N. SILVA MEZA.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA:**

LIC. MANUEL DE JESÚS SANTIZO RINCÓN.

Esta hoja corresponde al amparo en revisión 686/99, promovido por Centro Maguen David, A.C., fallado el cinco de julio de dos mil, por unanimidad de cuatro votos, en el sentido de: **PRIMERO.-** En la materia de la revisión competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se modifica la sentencia recurrida. **SEGUNDO.-** Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Centro Maguen David, A. C., respecto de los actos atribuidos al Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal. **TERCERO.-** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a CENTRO-MAGUEN DAVID, A.C., en contra de los actos reclamados a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Presidente de la República y Jefe de Gobierno del Distrito Federal consistentes en la expedición refrendo y publicación del artículo 27, fracción V, de la Ley Ambiental del Distrito Federal. **CUARTO.-** Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, en turno, respecto de las cuestiones de legalidad de su competencia. Conste.

JFC/aam/pbg.

23 OCT. 2000

Por lista de la misma fecha se notificó la resolución anterior a los interesados. Conste.

Siendo las catorce horas de la fecha antes indicada y en virtud de no haber comparecido los interesados a oír notificaciones, se tiene por hecha dicha notificación por medio de lista. Doy fe.